

Análisis comparado de las transiciones gubernamentales recientes en América latina

Autor: Mario Galindo

Destino: Congreso ALACIP 2022 – Santiago de Chile

Entidad: UMSA - Bolivia

Palabras clave: cambio gubernamental, transición democrática, alternancia de poder

Se trata de analizar las transiciones y cambios de gobierno entre 2018 y 2022, en América latina, tomando como referencia a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, a la luz de los siguientes conceptos: el de la teoría del péndulo ideológico, el de la pluralidad en el cambio de gobierno, el de la democracia con alternancia de poder y el de la democracia participativa versus la electoral. Este análisis comparado, va más allá del análisis de datos electorales y busca, la valoración cualitativa de cada cambio de gobierno y su peso estratégico en la región y en sus propios países.

Metodología: Análisis comparado, Método Mixto.

1. Antecedentes

América latina ha sufrido en su historia reciente, lo que varios analistas calificaron del “giro a la izquierda”, a partir de fines del siglo XX. Concretamente, con la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, la denominada revolución democrática y plurinacional de Bolivia con el triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia en 2005, la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador el 2008. Estos tres como fenómenos novedosos u de carácter neo populista. A lo que se debe añadir el triunfo de Luiz Ignacio Lula Da Silva en Brasil el 2003, la asunción del peronismo renovado argentino con Néstor Kirchner el 2003, ambos con matices de izquierda, pero con más populismo clásico que una clara definición ideológica. Otros triunfos de la izquierda fueron más efímeros: el de Fernando Lugo en Paraguay del 2008, con acortamiento de mandato presidencial; el de Ollanta Humala en Perú el 2011, con posterior enjuiciamiento político. Ambos, el de acortamiento de mandato y el de enjuiciamiento, incluido el de Dilma Russeff en Brasil el 2016, fueron de carácter parlamentario. Es decir, que fueron al menos formalmente constitucionales, ya que el parlamento, el que, en uso de sus atribuciones decidió su destitución y en algún caso, enjuiciamiento. El caso de Bolivia sigue en debate político e histórico, además de judicial. Las experiencias de Nicaragua y Honduras, salen de contexto y tendrán que ser tratadas con otro enfoque.

Es decir, que esta primera ola viene desde 1998 y ha durado hasta el momento en que Correa en Ecuador da paso a que un miembro de su propio movimiento, asuma el gobierno el 2017; se trató de Lenin Moreno, quien a los pocos meses realiza un distanciamiento de Correa, por razones de alejarse y no encubrir los actos de corrupción, que hasta hoy tiene Correa, y que debe responder judicialmente, aunque su extradición de Bélgica no prospera. Las elecciones de 2021 las ganó dificultosamente, Guillermo Lasso, actual presidente, el cual es de línea conservadora. Por tanto, se ha ratificado la interrupción del ciclo de izquierda.

El caso de Bolivia es más complejo, ya que primero un referéndum el 2016, no autoriza a Evo Morales postularse a un cuarto mandato y pese a ello Morales lo hace arguyendo que es su derecho humano. Posteriormente en las elecciones de 2019, se realizan denuncias de fraude

electoral, se produce un movimiento ciudadano que bloquea las calles de todas las ciudades de Bolivia, y Evo Morales renuncia, al mismo tiempo que asume la presidencia una parlamentaria de la oposición, Jeanine Añez, la presidencia interina. Las FFAA respaldan la decisión de la renuncia y la policía decide no salir a desbloquear las calles, lo que ha llevado a que hoy se califique este hecho de golpe de Estado, por parte de los partidarios de Morales. Añez acaba de ser sentenciada a 10 años de prisión recientemente, después de haberla retenido más de un año en la cárcel, sin sentencia. Las elecciones de 2020 las ganó el MAS de Morales con Luis Arce de presidente. Con ello se ha retomado el ciclo, con menos apuntalamiento ciudadano, pero con una mayoría relativamente cómoda.

El caso venezolano es más dramático, ya que Chávez después de dos mandatos, muere de cáncer el 2013 y deja su puesto a Nicolás Maduro, quien sigue ejerciendo la presidencia hasta hoy. Aunque ha surgido un Presidente del Congreso, Juan Guaidó, con un cargo inédito: Presidente Encargado de Venezuela, desde 2019. Este paralelismo se refleja en que Maduro controla FFA y Policía, tiene mayoría parlamentaria, y reprime las movilizaciones que surgen de manera eventual. Pero Guaidó tiene el reconocimiento de la mayor parte de países del mundo, y tiene un accionar que se enfoca en la política internacional. En todo caso, la revolución bolivariana continúa.

El caso de Paraguay es el de un presidente: Lugo, que accede a la presidencia el 2008, en alianza con grupos de centro y centro derecha y que le socavarán el poder desde dentro del gobierno y el parlamento en un clásico *impeachment*, por razones de moral y ética, que el congreso llevó adelante y que produjo el ascenso a la presidencia de Federico Franco del 2012 al 2013. Elecciones posteriores llevaron a Horacio Cartés el 2013 a la presidencia y a Mario Abdo el 2018 a la fecha. Ambos de orientación de derecha o conservadora, contraria a la de Lugo. Parece que ese giro se inició y concluyó con Lugo.

El caso de Brasil, es significativo, ya que Lula estuvo dos gestiones en la presidencia, del 2003 al 2011: Dilma Rousseff del mismo partido: el *Partido Dos Trabalhadores* PT, del 2011 al 2018 en dos periodos, donde el segundo se interrumpe por un *impeachment* de corrupción en la captación de fondos de empresas públicas, para las campañas electorales del PT, el 2016. Michel Temer asumirá del 2016 al 2018 y posteriormente en elecciones ganará el ultra conservador Jair Bolsonaro el 2019 hasta la fecha. Lula fue detenido y encarcelado. Recientemente ha salido de prisión. Estas elecciones de este año mostrarán si el giro a la izquierda se retomará o seguirá interrumpido.

El caso de Argentina es que Néstor Kirchner fue presidente una gestión, del 2003 al 2007; luego asumirá su esposa Cristina Fernández del 2007 al 2011 y en ese ínterin Néstor Kirchner fallecerá el 2010, lo que obliga a Cristina Fernández a seguir otro periodo en el cargo, dado el alto perfil electoral del peronismo, del 2011 al 2015. Aquí se interrumpe el ciclo peronista ya que Mauricio Macri, un conservador, ganará las elecciones de 2015, con la promesa de hacerse cargo de la crisis de la deuda externa y los fondos buitres que se apropiaron de la misma y estaban ahogando las finanzas públicas. Luego recuperará el peronismo la presidencia el 2019 con Alberto Fernández y Cristina Fernández de vicepresidente, como un resguardo a eventuales juicios de responsabilidades, por la difícil situación económica del país, generada por su incompetencia para resolverla. El ciclo, por tanto, ha sido continuado, con una breve interrupción, como en Bolivia, aunque en condiciones electorales más limpias.

En el Perú, luego de cumplir su mandato Ollanta Humala del 2011 al 2016, luego será enjuiciado y no durante su mandato. Gana las elecciones Pedro Pablo Kuczynski, quien es depuesto por el parlamento a los pocos meses de asumir. Solo gobernó del 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018. El motivo fue su vinculación a sobornos de la empresa Odebrecht. Asumirá su vicepresidente Martín Vizcarra, quien luego de hacer elecciones parlamentarias y ni así dominar el escenario político, debe renunciar el 2020. Surgen dos presidencias interinas: la primera de Manuel Merino por 5 días, del 10 al 15 de noviembre de 2020; la segunda de Francisco Sagasti, de noviembre a 2020 a julio de 2021. Las elecciones de ese año permiten que asuma la presidencia, otra vez la izquierda, con Pedro Castillo. Por tanto, en Perú al igual que en Bolivia y Argentina, el ciclo se ha reanudado, luego de una breve crisis político parlamentaria.

El caso de Chile, es diferente. Se ha tenido desde la caída de Pinochet, varios gobiernos de una alianza híbrida de la social democracia con la democracia cristiana, que ha dado como presidente a varios personajes que eran del *establishment* político. Primero Patricio Aylwin de la DC el 1990; Eduardo Frei de la DC el 1994; Ricardo Lagos del PS el 2000; Michelle Bachelet de PS el 2006. Aquí se produce una interrupción de este *pasanaku* presidencial, ya que gana las elecciones la derecha conservadora con Sebastián Piñera el 2010; pero retomará este esquema de DC-PS otra vez con Bachelet el 2014. Nuevamente gana el 2018 Piñera y el gran cambio viene el 2022 con Gabriel Boric, de una alianza de varias organizaciones de izquierda especialmente juveniles e indígenas, incluido el PCCH. Esto acaba de ocurrir y todo en un ámbito electoral democrático muy claro. Es decir, se puede decir que Chile se ha incorporado a este giro a la izquierda, en su segunda ola.

Para cerrar podemos hablar de Uruguay, que se sumó al giro a la izquierda con el triunfo del Frente Amplio de Tabaré Vázquez el 2005, amplia alianza de organizaciones de izquierda de todo tipo. Luego vendrá la presidencia del emblemático José Mujica, un ex guerrillero muy dado a filosofar desde un punto de vista humanista de izquierda, que gobernó desde 2010. Volverá Vázquez el 2015, para que el ciclo se interrumpa abruptamente el 2020 y asuma Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, un partido de derecha nítida, que gobierna hasta hoy.

Lo que cabe es ver como el giro a la izquierda en América del Sur y en especial en los países andinos, se ha iniciado entre fines del siglo XX, mas por la crisis de los partidos de derecha y centro, que por mérito propio. La población se desilusiono de los partidos que ofrecían mejores condiciones de vida y sin embargo se corrompían y no resolvían problemas básicos como la pobreza, lo que llevó a que surjan estos presidentes, líderes, caudillos más que partidos u organizaciones, algunos neo populistas y otros populistas de izquierda. Este ciclo se inauguró en Venezuela en 1998, hasta el evento del Perú de Humala el 2011. Se empiezan a interrumpir en varios de ellos desde Macri en la Argentina el 2015 y luego Kuczynski en Perú el 2016, hasta las caídas de Morales con fuga incluida el 2019 y la de Vázquez en Uruguay, de manera democrática.

Se reanuda este ciclo con los triunfos electorales del MAS en Bolivia el 2020, y de Castillo en Perú el 2021. El caso del peronismo en Argentina, más que un retorno de la izquierda, es una derechización del populismo, que habría que analizar en mayor detalle. Hay casos donde el ciclo se ha interrumpido sin visos de retorno, como es el caso de Ecuador, Paraguay y Uruguay. Brasil es la gran incógnita.

Hace pocas semanas ganó en Colombia, Gustavo Petro, otro ex guerrillero, en un frente también bastante amplio de izquierdas. Luego de varios gobiernos conservadores desde Álvaro Uribe, de

ultra derecha, que asciende al gobierno en 2002 en dos períodos hasta el 2010. Le seguirá Juan Manuel Santos, de centro derecha, que logrará firmar la paz con la guerrilla de las FARC, que gobernó de 2010 a 2018 en dos períodos también. Para que acceda al gobierno Iván Duque de derecha, este mismo 2018 hasta este 2022. Se agotó la derecha y el acceso de Petro es aire fresco. Pero deberá también lidiar con el tema congresal. En todo caso, un país más que se suma al segundo giro a la izquierda, igual que Chile.

Cabe pues analizar esta dinámica a la luz de algunos hechos históricos y elementos socio económicos y políticos para el debate.

2. Estudio de caso

2.1. Ecuador

Desde inicios de la década de 1980, Ecuador inició un proceso de mayor inserción en la economía global mediante políticas económicas de «estabilización» y luego, paulatinamente, a través de políticas de «ajuste», enmarcadas en la corriente neoliberal, cuya finalidad principal fue readecuar la economía a las demandas del capital transnacional. Estas políticas fueron aplicadas a partir de la presidencia de Osvaldo Hurtado (1981-1984), quien sucedió a Roldós luego de que este falleciera en un accidente de aviación, y luego profundizadas por León Febres Cordero (1984-1988) y posteriormente por Sixto Durán Ballén (1992-1996), sobre la base de un modelo empresarial y de privatizaciones. Los primeros ajustes priorizaron la obtención de recursos para cubrir los compromisos internacionales de balanza comercial y, especialmente, el servicio de la deuda. Para ello debieron reducir el gasto en el resto de las partidas presupuestarias, incluidas las sociales, junto con otras medidas macroeconómicas de tipo monetario y cambiario. La consecuencia fue un incremento de la inflación y la inestabilidad cambiaria que provocó un impacto en el aparato productivo del país.

En 1983, las empresas privadas, con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, presionaron al gobierno de Hurtado para que el Banco Central asumiera sus deudas externas. Así, la deuda contraída en dólares por el sector privado se transformó en deuda en sucres, mientras que el Estado asumió los compromisos en dólares con el exterior. La «sucretización» de la deuda y las ventajas concedidas posteriormente por León Febres Cordero se convirtieron en un subsidio directo al sector privado, otorgado con la excusa de proteger el empleo en empresas estranguladas por sus compromisos externos. Este «subsidio» profundizó el déficit fiscal, que fue financiado con una política monetaria expansiva, a través del señoreaje (emisión de moneda para cubrir déficits), lo que contribuyó a su vez a aumentar la inflación. Las tasas de interés nominales fueran altas y volátiles (entre 12% y 70%), lo cual frenó la inversión y consolidó el rentismo y la especulación en desmedro del consumo.

La política fiscal estuvo marcada por un constante aumento del gasto, mientras que los ingresos públicos quedaban sometidos a la volatilidad de los precios del petróleo, principal ingreso de un Estado con un sistema tributario pobre e incipiente.

En cuanto al gasto social, la población había experimentado avances en sus condiciones de vida durante la década de los 70 y primera mitad de los 80, como resultado del efecto inercial de la bonanza petrolera. Sin embargo, desde fines de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con el

aumento del endeudamiento externo y las dificultades fiscales, la inversión social del Estado se redujo. Dicho de otro modo, el Estado gastó más, pero generó menos servicios públicos.

En 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad (1998-2000), se produjo la mayor crisis financiera de la historia del país. Su origen se remonta al gobierno de Durán Ballén y la promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta ley disminuyó el control de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades financieras. Las elevadas tasas de interés nominal promovidas por la Junta Monetaria para motivar el ahorro nacional y compensar la galopante inflación, la liberalización del flujo de capitales, la falta de control a los banqueros y la constante devaluación del sucre fueron, según diversos autores, las principales causas que llevaron a la quiebra del sistema financiero. El Estado, una vez más, salió al rescate del sector privado, en esta oportunidad haciéndose cargo de 72% de las entidades crediticias a un costo de 4.000 millones de dólares, equivalentes a 20% del PIB de 1998 (el costo total del salvataje bancario superaría los 8.000 millones de dólares). El déficit público aumentó y, con él, la deuda pública, que en 1999 superaba 100% del PIB.

El Estado se vio obligado a realizar profundas reformas económicas para sanear el maltrecho sector público: eliminó subsidios (gas, combustibles y electricidad) y comenzó un proceso de privatización de empresas públicas, especialmente del sector petrolero, electricidad y telecomunicaciones. El 11 de enero de 2000 se impuso la dolarización a 25.000 sucres por dólar. Sin embargo, el aumento de la inflación ese mismo año demostró que el tipo de cambio adoptado no se ajustaba a la realidad económica del país, aunque sí logró licuar la deuda de los bancos con los particulares.

En 1999 se registró la mayor caída del PIB, 30,1%: pasó de 19.710 millones de dólares a 13.769 millones. El PIB por habitante se redujo 32%, de 1.619 a 1.109 dólares, 43% del promedio de América Latina. El país experimentó uno de los procesos de empobrecimiento más acelerados de la historia de la región y una acelerada concentración de la riqueza: mientras en 1990 el 20% más pobre recibía 4,6% de los ingresos, en 2000 captaba menos de 2,5%; en el mismo periodo, el 20% más rico incrementó su participación de 52% a más de 61%.

El periodo posdolarización (2000-2006) estuvo protagonizado por una continua inestabilidad política y por frecuentes cambios de gobierno. Desde un punto de vista macroeconómico, sin embargo, se consiguió, luego de cinco años, la esperada estabilidad de precios. Entre 2000 y 2005, el país creció a tasas reales superiores a 4% (excepto en 2003), por encima de las observadas en la década precedente y superiores también a las de la media de América Latina. Las tasas de interés activas y pasivas se redujeron, aunque con niveles todavía lejanos a las tasas de los países desarrollados y con un elevado spread lo cual confirmaba la debilidad e ineficiencia del sistema financiero ecuatoriano. La balanza de cuenta corriente se recuperó y a partir de 2004 comenzó a ser superavitaria debido a un aumento de las exportaciones, principalmente de petróleo, beneficiadas por los altos precios internacionales. No obstante, la balanza comercial no petrolera continuó siendo deficitaria, lo que evidenciaba un problema endémico del país: la fuerte dependencia de las importaciones por falta de competitividad. Los ingresos fiscales aumentaron como consecuencia de una mejora en la recaudación de impuestos, sobre todo del impuesto al valor agregado (IVA), aunque la evasión siguió siendo elevada. La deuda externa se redujo de 82% del PIB en 1999 a 32% en 2006. Sin embargo, casi 40% del presupuesto general del Estado de 2006

se destinó al servicio a la deuda, frente a 22% destinado a inversión social. Aun así, la pobreza disminuyó, gracias sobre todo a las remesas enviadas por los emigrantes.

El papel del Estado en el gobierno de Rafael Correa

Los aparentemente buenos resultados macroeconómicos de la etapa precedente camuflaron los problemas endémicos del país. Rafael Correa, cuando se desempeñaba como ministro de Economía de Alfredo Palacio (2005-2007), había criticado la excesiva libertad de un mercado ineficiente y controlado por la oligarquía, la debilidad estructural del Estado y sus instituciones y la fuerte dependencia de los organismos internacionales. Su discurso produjo tal impacto sobre la ciudadanía que el 15 de enero de 2007 logró alcanzar la Presidencia. Correa defiende una mayor intervención del Estado y de la sociedad en la actividad política y económica del país como base para favorecer a las clases sociales más necesitadas.

Para realizar las transformaciones enmarcadas en lo que denomina la «revolución ciudadana», Correa convocó a una consulta popular con el objetivo de formar una Asamblea Constituyente. La nueva Constitución, refrendada por el referéndum del 28 de septiembre de 2008, ha otorgado mayores poderes al Ejecutivo, sobre todo en materia económica. Numerosas voces críticas consideran que se produjo una excesiva concentración de poder en el gobierno³⁶, aunque también es cierto que se articulan nuevos mecanismos de control, como la revocatoria del mandato del presidente o la muerte cruzada, por la que un poder puede destituir al otro, dirimiendo el conflicto mediante elecciones. Asimismo, se crearon dos nuevos poderes que fortalecen la institucionalidad del Estado a través de la corresponsabilidad: el Electoral, encargado de organizar y hacer respetar las normas en los procesos electorales y, el de Participación Ciudadana y Control Social, que incorpora a la ciudadanía en los distintos niveles de decisión del Estado.

Otro de los aspectos interesantes de la nueva Constitución es su visión del ser humano basada en el concepto del «buen vivir» (sumak kawsay en quichua), que apunta a una mayor armonía y respeto hacia la naturaleza. Con ello, se trata de contrarrestar el modelo individualista propio de las corrientes neoliberales y favorecer las antiguas formas de colaboración comunitaria, como la minga.

Pero quizás la característica más importante del gobierno fue su prioridad por la inversión social, que en 2008, por primera vez en las últimas décadas, superó el monto asignado al servicio a la deuda (20% al servicio a la deuda y 31% a inversión social). El principal programa social del gobierno es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), cofinanciado por el Banco Mundial (BM) y destinado a las familias de menores recursos, con el objetivo de reducir la pobreza por consumo y aumentar la inversión en capital humano³⁷. También se ha incrementado considerablemente el Bono de la Vivienda, tratando de atender el importante déficit inmobiliario del país. Como resultado, se ha registrado una reducción de la pobreza, tanto en las áreas urbanas como en las rurales³⁸, mientras que los salarios reales se han incrementado a niveles históricos.

Además de fortalecer su rol social, el Estado se ha involucrado en el desarrollo económico mediante un aumento de las inversiones públicas. La formación bruta de capital pasó de 4,6% del PIB a 8,6% entre 2007 y 2008, y se focalizó en sectores estratégicos como la infraestructura de

transporte, comunicaciones y energía, vivienda, educación, salud y sector agropecuario. Adicionalmente, el Estado ha asumido un mayor control sobre los recursos energéticos y mineros del país: la reforma a la Ley de Hidrocarburos de octubre de 2008, en la que se establecieron nuevas condiciones para la explotación y exportación del petróleo³⁹, es una prueba de ello.

Para llevar a cabo estas políticas, que en muchos casos implicaron una expansión fiscal vía gasto, el gobierno debió aumentar los ingresos públicos. Estos han provenidos de los ingresos por exportación de crudo propiciados por el alza de los precios internacionales durante 2008 y de la mejora en los ingresos tributarios gracias a la buena gestión del Servicio de Rentas Internas⁴⁰. También contribuyó positivamente la eliminación de los fondos extraordinarios, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (Feirep), la Cuenta Especial de Reactivación Económica, Productiva y Social (Cereps) y el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (Feiseh). Los recursos que antes se destinaban a estos fondos ahora ingresan en la cuenta única del Tesoro.

En este marco, Correa resistió la intromisión de los organismos internacionales en las decisiones del país. Ha sido muy crítico respecto de la legitimidad de la deuda externa e incluso ha declarado la mora técnica en los bonos Global 2012 y 2030. Estas acciones elevaron el riesgo país a niveles históricos, lo cual limitó las inversiones extranjeras y los préstamos para financiar el déficit fiscal. Esto obligó al gobierno a buscar fuentes de financiación alternativas en países como Venezuela, Irán o China, y en organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

Correa rechazó la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con EEUU, como hicieron otros países vecinos, debido a sus posibles efectos en temas agrarios y de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, se manifestó a favor de una profundización de la integración latinoamericana, para lo cual impulsó la creación del Banco del Sur y el Fondo del Sur como alternativas al BM y el FMI⁴², y respaldó la creación de una moneda regional virtual: el Sistema Unificado de Compensación Regional (Sucre)⁴³. Sin embargo, se trata en general de proyectos que están lejos de ser una realidad debido a la falta de entusiasmo de algunos gobiernos de la región.

Finalmente, hay que señalar que en su momento Correa criticó la dolarización, con el argumento de que implicaba privar al Estado de su política cambiaria, frecuentemente utilizada para recuperar competitividad, con el consiguiente impacto negativo sobre el sector externo. La dolarización es además una camisa de fuerza para la política monetaria, al imposibilitar la emisión y condicionar la liquidez del sistema al ingreso de divisas por comercio, remesas o préstamos e inversiones del exterior. Pero la crisis financiera internacional iniciada en 2008 ha puesto en peligro la propia supervivencia del sistema monetario por falta de liquidez. Sus efectos se transmitieron a la economía ecuatoriana a través de cuatro canales: la caída del precio internacional del petróleo, que supuso una considerable pérdida de ingresos para el sector público; la disminución del ingreso de divisas, que ocasionó un déficit comercial a partir de septiembre de 2008; la reducción de las remesas por la pérdida de trabajo de los emigrantes ecuatorianos en EEUU y Europa, con la posibilidad de que muchos de ellos vuelvan al país; y la disminución del flujo de ingreso de capitales. La dolarización, a pesar de haber generado estabilidad macroeconómica, puede convertirse en un lastre para el desarrollo económico del país

en la medida en que priva al Estado de herramientas claves. Aun así, Correa reconoce que salir en este momento sería aún más perjudicial.

Lenin Moreno. La supervivencia política primero

Desde fines de 2014 el Ecuador ha vivido años complejos en lo económico, en lo político y en otras dimensiones sociales. Si bien la situación no es tan vertiginosa como en otros rincones latinoamericanos, el país andino acumula serios problemas que pudieron enfrentarse, y en algunos casos hasta superarse, durante la década correísta (incluso problemas de tipo estructural). Sin embargo, luego de discursos progresistas, bonanzas idas y corrupciones galopantes, Ecuador sigue siendo «un país incierto que no cambió».

Frente a la herencia correísta de «no-cambio», el gobierno de Lenín Moreno arrancó con una fuerte fragilidad política: en un inicio quedó oscurecido por un posible fraude electoral denunciado por el opositor Guillermo Lasso; luego la disputa entre correísmo y «morenismo» entrampó al gobierno (aunque manteniendo alianzas estratégicas en puntos clave). Al parecer, la necesidad de Moreno de legitimarse luego de las elecciones, a más de ganar espacios políticos al correísmo, hizo que ubique los problemas económicos en segundo plano. Así, la supervivencia política del gobierno fue lo que primó en su primer año de gestión. Como resultado, la política económica se ha mantenido sin rumbo, al principio con dos obtusas mezclas progresistas-neoliberales (cada una con sus respectivos matices). Solo en su segundo año de gobierno, el panorama se aclaró y el neoliberalismo clásico vuelve a asomar, aunque este retorno ya se venía sembrando en los últimos años de Rafael Correa.

En este complejo escenario, la «no-transformación» correísta aparece como una cruz que acompañará a Ecuador por años, mientras que el «morenismo» parece haber llegado solo para sobrevivir y cerrar la pinza neoliberal. Mientras, el tiempo sigue avanzando -y se lo sigue desperdiciando- la estructura económica ecuatoriana vive una crisis persistente ante la cual no parece tener la capacidad de reponerse.

Entre 2007-2014 el PIB ecuatoriano creció a una tasa promedio anual de 4% (2,5% en términos per cápita). Es decir, hubo un crecimiento relevante de la producción -aunque inferior a otras épocas de expansión, como los años 70- y de los ingresos, que incluso motivó a que el correísmo construya la imagen del Ecuador como la de un «milagro económico», un «jaguar latinoamericano», entre otras estridentes y desvaríos.

Sin embargo, desde 2015 el «jaguar» se pondría a prueba frente a dos importantes *shocks* externos: la caída de los precios de los *commodities* que, entre junio de 2014 y febrero de 2016, hizo que el precio del crudo ecuatoriano caiga de 100 a 22 dólares por barril; y la apreciación del dólar que, para el mismo período, implicó el paso de una cotización de 1,36 a 1,11 dólares por euro (apreciación de 22,6%). Ambos *shocks* golpearon a las exportaciones petroleras y no petroleras: tomando como base el año 2014, de 2015 a 2017 ambas exportaciones cayeron en un promedio anual de casi 7 mil millones de dólares (7% del PIB), y 710 millones (0,7% del PIB) respectivamente. Por si eso no bastara, el terremoto del 16 de abril de 2016 dejó una contracción -oficial- de -0,7% del PIB y, sobre todo, la tragedia de más de 600 fallecidos.

Si bien los *shocks* fueron graves, su principal efecto fue el «desnudar al jaguar» y develar que las estridencias correístas eran propaganda. Así, en 2016, el PIB cayó en un 1,58% (-3,1% per cápita). Luego, en 2017 y ya con el gobierno de Moreno en funciones, los datos hablan de una recuperación de 3% (1,5% per cápita), pero en términos absolutos lo que se ve es un estancamiento: a fines de 2017 el PIB per cápita llegó a 6.143 dólares anuales por persona, cuando en 2014 fue de 6.347 dólares. Es decir, Ecuador «perdió» tres años de ingresos. A eso se agrega que las expectativas no son alentadoras, como muestra la persistente caída de la inversión: mientras que en 2014 ésta representó 26,6% del PIB, para 2017 su peso cayó a 22,4%, la proporción más baja vista desde 2010.

Mientras que producción e inversión se estancan, el mal de la deuda ha contraatacado. Ya en los últimos años del correísmo la deuda pública creció drásticamente de 10 mil millones de dólares en junio de 2009 a 43 mil millones en marzo de 2017 (aumento de 7 a 26 mil millones en el caso de la deuda externa), echando por la borda la auditoría a la deuda hecha en 2008. En definitiva, el correísmo se endeudó drásticamente, incluso superando el límite legal de endeudamiento del 40% del PIB. De hecho, se ha acusado penalmente a Correa y a su equipo de romper la ley distorsionando la contabilidad de la deuda para no rebasar el límite legal de endeudamiento. Aunque la legalidad se encuentra en disputa, la cuestión es obtusa pues si el correísmo excedió el límite legal de endeudamiento, el «morenismo» acentuó las cosas: en apenas un año de gobierno, la deuda creció en 6 mil millones de dólares netos llegando, en abril de 2018, a casi 49 mil millones (34 mil millones de deuda externa). Igualmente, el servicio de la deuda va creciendo, pasando de 1.287 millones de dólares a 9.463 millones entre 2009 y 2017. Y a ese saldo aún debe sumarse las «preventas petroleras» negociadas con China y otras deudas que sumarían hasta 10 mil millones adicionales.

En términos más cotidianos, el empleo y los precios son claros indicadores de que la recuperación aún es muy lejana. En el primer caso hay un claro deterioro en el «empleo adecuado», cuyo peso en la población económicamente activa (PEA) cayó de 49,3% a 42,3% entre 2014-2017 (caída acompañada de una reducción del ingreso laboral medio de -3,1% en términos reales). En el segundo caso, en 2017 Ecuador vivió una inusual caída del índice de precios al consumidor de -0,2% (deflación), denotando una contracción de *demand*a que podría estar atada hasta al mismo estancamiento de ingresos laborales.

En particular, una deflación en dolarización hace pensar en la posibilidad de que los *shocks* externos han disminuido el circulante, reduciendo la dinámica económica especialmente en aquellas actividades informales que se mueven fundamentalmente con dinero líquido (y que en Ecuador podrían englobar a un 45% de empleados). Esta situación de potencial contracción de liquidez es preocupante más aún si se ve que los dólares ingresados vía endeudamiento externo han sido insuficientes para evitar que, en 2017, la balanza de pagos refleje una salida neta de -1.859 millones de dólares. Una salida explicable -entre otros factores- por el propio aumento del servicio de la deuda externa.

Las caídas en producción, inversión, empleo y precios a más de la expulsión de dólares reflejada en la balanza de pagos indican que la estructura económica ecuatoriana no ha logrado reponerse de los *shocks* vividos desde 2015. Y tal incapacidad parece tener un origen estructural, más cuando se ve que ni el moderado aumento del precio del crudo ecuatoriano a 55 dólares por barril en abril de 2018 ha brindado los recursos suficientes para evitar que, en el mismo mes, se registre una

inflación negativa de -0,14% (a la vez que en marzo de 2018 el empleo adecuado se ubicó en 41,1% de la Población Económicamente Activa).

¿Por qué la persistencia de la crisis, aún con la ligera mejora de los precios del petróleo? Quizá la principal razón se encuentre en los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, sobresaliendo dos: un estancamiento industrial, reflejado en el peso casi inalterado de la manufactura en el PIB (pasando de 11,9% a 11,5% entre 2007-2017); así como una tendencia a la reprimarización exportadora, reflejada en un aumento del peso de los productos primarios en el total de exportaciones (pasando de 74% a 77%). Otra estructura intacta en extremo relevante es la elevada concentración y centralización del capital, en beneficio de importantes grupos económicos. Una muestra: entre 2010-2016 el índice de Gini de distribución de activos entre compañías se ha mantenido estancado en 0,92 puntos. Igual de elevada se mantiene la concentración de la tierra y el agua. De hecho, varios grupos -como por ejemplo Eljuri o Nobis- obtuvieron millonarias utilidades en el correísmo, pagaron un mínimo de impuestos (apenas 2,3% de sus ingresos totales se destinaron al impuesto a la renta en 2016) y, hasta han ubicado representantes directos dentro del gabinete de Moreno.

Es justo desde este último problema estructural -el fuerte lazo entre el poder político y el poder de grandes grupos económicos oligopólicos- que emergen las dificultades para construir alternativas de transformación que den al país mayor fortaleza interna frente a shocks externos. Solo basta pensar en que ningún grupo económico deseará cambiar las estructuras cuando éstas le brindan elevados niveles de concentración (por ejemplo, hay empresas que dominan más del 70% del mercado de varias actividades manufactureras, así como apenas un banco que concentra alrededor del 30% de los depósitos y los créditos, por mencionar apenas dos ejemplos).

¿Hacia un nuevo Consenso de Washington?

En un primer momento, que quedó recogido en el «plan económico» presentado por Moreno en octubre de 2017, se plantearon algunas medidas llamativas de corte progresista, aunque insuficientes para enfrentar los problemas estructurales antes mencionados; plan a ratos con claros indicios neoliberales. Entre los puntos a destacar de dicho plan están:

- **Incentivar la creación de empleo** reduciendo los tributos a pequeñas empresas y promoviendo nuevas formas de contratación laboral (entiéndase flexibilización).
- **Sustentabilidad de cuentas fiscales** reduciendo el déficit fiscal y generando una austeridad reduciendo en 10% el sueldo de los servidores públicos que más ganan, a más de reducir los gastos en viáticos, vehículos de lujo entre otros gastos varios.
- **Reformas tributarias** como el incremento del impuesto a la renta a grandes empresas, incremento de impuestos a quienes ganen más de 3 mil dólares mensuales y uso de tarifas arancelarias generalizadas para contener las importaciones.
- **Cambio del manejo monetario** por medio de la entrega del dinero electrónico a la banca privada y la obligación a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades económicas a aceptar el dinero electrónico como medio de pago.
- **Ajuste tributario** racionalizando beneficios tributarios, perdonando 100% de intereses y multas a deudores tributarios y deudores de aportes a la seguridad social -sobre todo grandes- a cambio de que paguen sus deudas en el corto plazo, así como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para el año 2019.

- **Ajuste externo** reduciendo el impuesto a la salida de divisas de forma gradual según cómo avance la balanza de pagos, así como el aumento de aranceles.
- **Incentivos a inversiones** especialmente con una serie de exoneraciones tributarias.
- **Alianzas público-privadas** (entiéndase casi privatizaciones) en infraestructura, hidrocarburos, energía, minería, telecomunicaciones, transporte y obras públicas.
- **Reducción del gasto público** extendiéndose a eliminación de instituciones públicas, reducción de asesores, ventas de inmuebles, etc.
- **Ratificar las nuevas formas de contratación laboral** según las necesidades de sectores como el turismo, la agricultura, la pesca entre otros.
- **Fomento a la «economía popular y solidaria»** sin presentar medidas específicas.
- **Incentivos tributarios** exonerando el pago del impuesto a la renta por *8 años* a las empresas que hagan nuevas inversiones en las ciudades de Quito y Guayaquil, y por 10 años a quienes inviertan en las demás ciudades del país.
- **Ratificación de varias de las propuestas de abril**, especialmente en lo que refiere a la eliminación de impuestos y condonación de intereses y multas a deudores del Estado.
- **Créditos** para la economía popular y solidaria, en beneficio de 250.000 personas.

Claramente esta primera propuesta denotó una disputa entre medidas de apoyo a pequeñas empresas, aumento de impuestos a grandes empresas y a quienes más ganan (propuestas tibias, pero con el potencial de abrir campo a nuevas políticas realmente redistributivas), y medidas neoliberales como la flexibilización laboral o la entrega del dinero electrónico a la banca privada (cuando ya había propuestas -para el debate- donde el dinero electrónico podía contribuir a la reactivación económica desde lo público). Asimismo, se vieron medidas insuficientes como la «austeridad fiscal», la cual se enfocó en seguir reduciendo la inversión pública (cosa que ya venía haciendo el correísmo), sin cuestionar el gasto corriente en salarios y subsidios mal direccionados (que nunca fueron redistributivos).

Guillermo Lasso. Vuelve el neoliberalismo

En su primera semana en funciones, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, ha mostrado su intención de despedirse de la era correísta. Su discurso en la ceremonia de asunción, hasta la firma de sus primeros decretos y el envío de un proyecto de ley al Legislativo son algunas de las acciones que despiden el legado de la “Revolución Ciudadana”, nombre que ex presidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia ecuatoriana, le dio a su proyecto político.

Guillermo Lasso es el cuadragésimo séptimo presidente de la República del Ecuador. El líder del movimiento CREO llegó al cargo luego de postularse en tres ocasiones. Lasso se posesionó el 24 de mayo de este año y en su discurso inaugural habló sobre la república, la democracia, el libre comercio y las vacunas.

Ese mismo día, Lasso firmó sus primeros decretos: uno de ellos incluye un Código de Ética para los funcionarios del ejecutivo ecuatoriano. Además, en su primera semana, el nuevo presidente envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Comunicación expedida por Rafael Correa.

Aquí, diez de las claves con la que, según anunció, busca romper con el pasado e iniciar una nueva era:

1. Restitución de los valores republicanos

El novel presidente del Ecuador atravesó su discurso de juramentación presidencial con proclamas asociadas a las libertades, la tolerancia, la cooperación y el pluralismo. Eso es todo lo contrario a la apuesta política del socialismo del siglo XXI, caracterizado por dar demasiadas atribuciones al Estado en materia de regulación de los mercados, de las oportunidades, y como extensión, de la relación entre las personas en la vida pública.

Actualmente, Rafael Correa es uno de los defensores del socialismo del s. XXI, proyecto político aún vigente en Venezuela, que ahora vive una crisis migratoria sin precedentes.

2. Menos trabas al periodismo y más comunicación

Inmediatamente después de ocupar el Palacio de Carondelet, sede del poder presidencial en Quito, Guillermo Lasso envió un proyecto de Ley de Libre Expresión que sustituye a la Ley de Comunicación, emblemática del gobierno de Rafael Correa y expedida en el 2013.

La Ley Orgánica de Comunicación, también conocida como la Ley "Mordaza", fue el instrumento legal mediante el cual el gobierno correísta perseguía y sancionaba a medios y periodistas ecuatorianos opositores.

3. Fin del culto a la imagen presidencial

Uno de los golpes al legado de Correa es la prohibición de las expresiones de idolatría política en las oficinas públicas. Esta, que es una característica de los gobiernos dictatoriales, autoritarios o personalistas, es algo que rechaza el nuevo presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Para evitar estas manifestaciones de culto a la personalidad, Lasso expidió un Código de Ética que prohíbe colgar fotografías suyas en oficinas gubernamentales, así no se podrá insinuar ningún compromiso personalista en el funcionamiento de la nueva Administración Pública.

4. Adiós al caudillismo

En su discurso de asunción al mando presidencial, Guillermo Lasso afirmó que desde ese día "termina la era de los caudillos. Solo hay una respuesta al autoritarismo: democracia y más democracia". Esta es la otra forma más frontal de despedir el modelo de liderazgo instalado por Rafael Correa.

La Constitución ecuatoriana de 2008, inspirada en el modelo institucional venezolano, como señalan algunos analistas, desarma el sistema estatal compuesto por tres poderes e inventa uno de cinco poderes. De estos cinco, hay un poder estatal de participación, llamado en Venezuela como Consejo de Moral, encargado de designar a todas las autoridades de control administrativo, electoral y constitucional. Durante el gobierno de Correa, quien tuvo el control político de ese poder estatal fue el presidente de la República. Con tales capacidades depositadas en la persona del Ejecutivo, la administración central se gestionó bajo los criterios personalistas y caudillescos.

Rafael Correa usaba sus "enlaces ciudadanos" y encuentros para atacar a la prensa. Uno de los casos más emblemáticos de ese ataque es el enjuiciamiento a Diario El Universo por publicar una columna de opinión en su contra. REUTERS/Daniel Tapia

En sus largas cadenas de radio y televisión, celebradas los sábados en Ecuador, el presidente Correa gobernaba en vivo, reprendía a sus funcionarios, daba órdenes a cualquiera de los poderes del Estado y contaba lo que había comido durante el día. "Yo soy el jefe de todos los poderes del Estado", dijo Correa en una ocasión. Por el contrario, Guillermo Lasso dijo en su posesión "seré presidente y solo presidente".

5. Terminar con los odios

En tono casi litúrgico, Guillermo Lasso dijo en su discurso de posesión: "Yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos". Se refería a la persecución judicial instalada como política entre los enemigos ideológicos tras definirse cual obraría desde el gobierno y cuál desde la oposición.

6. Respeto a la independencia de poderes

El 29 de abril, luego de que grupos feministas y de que la Defensoría del Pueblo interpusieran siete demandas de inconstitucionalidad al artículo 150 del Código Integral Penal (COIP) ante la Corte Constitucional, este organismo dio un fallo histórico. El artículo declarado inconstitucional establecía que solo las mujeres con discapacidad que habían sido violadas podían acceder al aborto no punible. El fallo de la Corte ahora permite que cualquier mujer víctima de una violación pueda realizarse un aborto y sin ir presas.

Lasso, miembro del Opus Dei, se ha opuesto al aborto –en todos los casos– en varias ocasiones. En septiembre de 2020, cuando el Ejecutivo analizaba el veto al Código de la Salud, que establecía que los médicos atiendan como una emergencia obstétrica a las mujeres que llegaban a la sala de emergencias con un aborto en curso, Lasso envió una carta al entonces presidente Lenín Moreno pidiendo que se vete el Código porque atentaba, según Lasso, a la protección de la vida desde la concepción.

7. Búsqueda de acuerdos políticos

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebran simultáneamente en Ecuador. Guillermo Lasso consiguió el boleto de entrada al balotaje tras conseguir el 19,7% de los votos en la primera vuelta presidencial. Pero en las elecciones legislativas no tuvo la misma suerte el movimiento político del ex banquero.

Con el 9,7% de los votos en las elecciones legislativas, el Movimiento CREO obtuvo 12 curules en un legislativo unicameral de 137 miembros. Para conseguir los 70 votos, que corresponde a la mayoría simple de la Asamblea Nacional del Ecuador, la bancada legislativa oficialista consiguió el apoyo de los 27 legisladores del indigenista Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakutik, de los 18 legisladores del partido Izquierda Democrática, y de los 13 de un bloque de legisladores independientes.

Rafael Correa, expresidente de la República, nunca tuvo que hacer acuerdos legislativos. Su gobierno tenía una bancada que ascendía a 100 de 137 legisladores, por lo que siempre tenía mayoría en el congreso.

8. Regreso de la educación intercultural

En su primera semana como presidente, Lasso asistió a la ceremonia ancestral de entrega de bastón de mando, organizada por dirigentes indígenas ecuatorianos. Durante el evento, Lasso se comprometió con el desarrollo rural y propuso reactivar las escuelas rurales.

Las escuelas rurales fueron cerradas durante el gobierno de Rafael Correa y sustituidas por las llamadas “escuelas del milenio”. Luego de su mandato, las investigaciones apuntan a que los contratos de esas edificaciones se realizaron con sobrepagos.

Las construcciones debían ofrecer ‘educación completa’ en todos sus niveles. Para los habitantes de las zonas rurales esto implicaba que las familias ya no debían enviar a sus hijos a la ciudad para que hagan sus estudios secundarios.

El propio Lenín Moreno, sucesor de Correa y quien fue su vicepresidente durante el primer periodo del mandatario, catalogó a estas escuelas como “elefantes blancos”.

Lasso ha dicho que, además de reabrir las escuelas, implementará un programa de educación bilingüe para que los niños y adolescentes puedan estudiar en su lengua nativa y para que se conserven las tradiciones ancestrales.

9. Libre comercio

En su discurso inaugural Lasso dijo que Ecuador se insertará “plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo”. Entre los ofrecimientos de Lasso está el mejorar el acceso al mercado de los principales socios comerciales de Ecuador y a las mayores economías del mundo a través de acuerdos de comercio e inversión.

Rafael Correa, durante sus períodos, se opuso a cualquier tipo de Tratado de Libre Comercio que “hipotequen al Ecuador”. Sin embargo, durante su mandato Correa contrajo obligaciones

crediticias con China que equivalen al 17 % del total de la deuda pública. Por tal razón, el Ecuador ha tenido que pedir ayuda financiera a multilaterales de crédito para saldar esa y otros montos de la deuda pública.

10. Menos Maduro y más mundo

El presidente Guillermo Lasso no invitó a su ceremonia de posesión presidencial a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela rechazado por casi 50 países del mundo libre. El acto fue leído por la opinión pública como una medida de rechazo al sistema político que está destruyendo las libertades e instituciones republicanas de los venezolanos.

La expresión del presidente Lasso “más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador” se puede explicar también en sentido inverso: menos restricciones a las libertades individuales y más políticas de inclusión como de respeto por las diversidades.

2.2. Perú

Las (imposibles) promesas de la transición democrática en el Perú, desde fines del año 2000, con la caída del régimen fujimorista y la apertura del período de transición democrática, parecían abrir las posibilidades para el desarrollo de un amplio proceso de democratización social y política. A ese interés respondió el inicio de la reforma del Estado, entre cuyos componentes más significativos se hallan los procesos de regionalización y descentralización que vienen implementándose actualmente. Asimismo, la creación de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado iniciado en 1980. También la decisión de proceder a la reforma de las Fuerzas Armadas, las cuales durante toda la década del '90 constituyeron el soporte del gobierno autoritario de Alberto Fujimori y de su red de corrupción. Se impulsó, asimismo, el funcionamiento de un espacio de diálogo entre las diversas fuerzas políticas y sociales, denominado Acuerdo Nacional, y se introdujo en la legislación el uso de mecanismos de concertación y participación en los distintos niveles de gobierno. No sólo parecía posible, sino sobre todo necesario, dejar atrás las décadas de violencia y autoritarismo neoliberal, forjando bases sólidas para un país realmente distanciado de la vieja sociedad de señores heredada de la larga historia colonial y republicana. Sociedad cuyos tentáculos se extienden a través del centralismo, el racismo, la ausencia de una ciudadanía plena para el conjunto de los peruanos y la extrema desigualdad (tramada con todo lo anterior) que organizan la vida cotidiana, así como el poder material y simbólico estatal y no estatal.

El *aggiornamento* neoliberal de la sociedad sobre el terreno abonado por el impacto de la violencia, así como por la severa crisis económica desatada desde mediados de la década del '70, durante toda la década del '90 fue posible la imposición, desde el Estado, de un nuevo ciclo modernizador de rostro neoliberal y autoritario.

La forma política de esta modernización fue el llamado fujimorismo, cuya base fue una alianza de poder entre la tecnoburocracia estatal, las élites empresariales y las Fuerzas Armadas, bajo la sombra ideológica del neoliberalismo. Pero el fujimorismo, como toda dictadura, no fue sólo un proyecto para la administración del Estado. Requirió también de la implementación de mecanismos efectivos de control sobre el conjunto de la sociedad. Ello tuvo una doble faz: de un lado, se dio impulso a un proceso de “desarrollo” y “modernización” sustentado en la apertura al libre mercado y la ejecución de programas dirigidos a cubrir las expectativas sociales (mediante la ejecución de obras de infraestructura, tales como carreteras, puentes o escuelas, y de programas sociales de alivio a la pobreza a través de organismos creados para tal fin). Pero en realidad, bajo

el espejismo fujimorista, la pobreza se expandió al punto de convertir al país en uno de los más pobres y desiguales de América Latina. En segundo lugar, de manera sistemática, se ejecutaron acciones destinadas a fragmentar el tejido social existente, utilizando para ello el pretexto de la lucha contra la subversión. La existencia de comandos militares y paramilitares de aniquilamiento –como el famoso Grupo Colina– fue sólo la punta del iceberg de una política sistemáticamente implementada, a lo largo de la década, para destrozarse toda forma de tejido social organizado, especialmente entre los sectores populares. Ello incluyó formas de represión abierta masiva o selectiva, operaciones de control preventivo, militarización cotidiana y diversas formas de manejo psicosocial de masas.

En lo que respecta a los partidos políticos, su crisis de representatividad y de inserción social fue profundizada en gran medida por el impacto de la neoliberalización social y estatal. La mayoría colapsó, y los que sobrevivieron fueron rebasados en las urnas por diversos movimientos independientes que cosecharon el descrédito de los partidos y de la propia política. El rechazo a los partidos y a la política, denominada como “vieja politiquería”, también fue alentado sistemáticamente desde el Estado durante la “década de la antipolítica” (Degregori, 2001) que significó el fujimorismo.

Las estructuras organizativas y los principios ideológicos de los partidos fueron reemplazados por una concepción sumamente pragmática de la participación política, al margen de cualquier institucionalidad y motivada sobre todo por la búsqueda de beneficios personales y grupales. De ese modo, se consolidó un proceso de fragmentación y desarticulación social sin precedentes en la historia peruana. Fragmentación y desarticulación que han licuado los intereses sociales populares, afectando la posibilidad de representación política efectiva. De allí que al hablar del caso peruano no sólo sea necesario hablar de una crisis de representación política, sino más bien de una crisis de representatividad. Todo esto se relaciona con el éxito del neoliberalismo y el fujimorismo. A diferencia de lo ocurrido en otros países andinos, como Ecuador y Bolivia, la imposición de las políticas neoliberales no generó ninguna forma de resistencia social organizada en el Perú.

Durante los ocho meses del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua (noviembre de 2000 a julio de 2001), el clima de movilización social de los últimos años del fujimorismo se diluyó casi completamente. La situación dio un giro desde los primeros meses del gobierno de Alejandro Toledo. Paulatinamente, a lo largo y ancho del territorio nacional fueron incrementándose las protestas y reclamos, protagonizados por sectores muy diversos: ex-trabajadores estatales despedidos durante el fujimorismo, jubilados, usuarios de servicios públicos, agricultores, microempresarios, transportistas, comunidades campesinas e incluso amas de casa. El contexto de transición democrática brindó un escenario propicio para el “destape” de muchas demandas y conflictos incubados en el curso de la implementación del neoliberalismo, pero eficazmente contenidos por el fujimorismo.

El cholo Toledo y la venta de imagen pública

El gobierno de Toledo fue un retorno a un neoliberalismo clásico, privatización de empresas públicas, reducción del gasto social, reducción de la inversión pública, reducción de la participación del estado en la economía, en fin, un conjunto de medidas altamente liberalizadoras de las fuerzas del mercado.

Toledo vendía una imagen política, como del “cholo” que puede formarse en Estados Unidos, casarse con una norteamericana, como efecto se mostrar que el cholo peruano, puede triunfar en el capitalismo, puede desenvolverse socialmente en el ámbito de las multinacionales y de la economía global, y puede transitar por la académica internacional, con total libertad, si tiene claros sus objetivos y sus metas en cuanto a progreso económico y posicionamiento social superior.

Alan García. El APRA vuelve al poder con discurso más neoliberal

En los cinco años siguientes, García fungió como el indiscutible líder de la oposición al Gobierno de Toledo, cuya popularidad comenzó a erosionarse con inusitada rapidez a medida que la ciudadanía tomaba nota de las promesas electorales incumplidas, de los escándalos que implicaban a personas del círculo presidencial y del propio estilo de liderazgo de Toledo, considerado vacilante y errático. Un factor fundamental de la debilidad crónica del oficialismo era la carencia de la mayoría absoluta en el Congreso. El jefe aprista ejerció una oposición no destructiva, aunque contundente dentro de los parámetros normales en una democracia parlamentaria.

En marzo de 2002 García fue uno de los cabezas de fila que firmaron en el Palacio de Gobierno el llamado Compromiso de Diálogo para un Acuerdo Nacional, pero transcurrido el ecuador de la legislatura redobló sus presiones a Toledo para que sometiera a su equipo de gobierno a una profunda remodelación. En julio de 2004 el PAP respaldó la primera huelga general que los sindicatos convocaron contra la política económica de Toledo. Claro que no todo era actividad política para García. Así, en 2001 tuvo un reencuentro de alto postín con las aulas al ser elegido director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, en Lima.

Por otro lado, en agosto de 2003 García apareció citado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), panel encargado de documentar y analizar las causas de la violencia política que había azotado el país entre 1980 y 2000, como responsable político, y no penal, de los casos de violaciones humanitarias cometidas por los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado durante su ejercicio presidencial. El error de García —y de su predecesor, Belaúnde— había consistido, establecía la CVR, en no aplicar una estrategia integral de paz y en la pasividad mostrada por los poderes políticos del Estado a la hora de impedir los atropellos de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban con impunidad.

El XXII Congreso Nacional del PAP, en junio de 2004, decidió recuperar la estructura de tipo triunvirato que había existido entre 1985 y 1988, es decir, un presidente ejecutivo secundado por dos secretarios generales, uno para el "frente interno" (responsable de la organización y la estructura orgánicas) y otro para el "frente externo" (es decir, el "frente social" y el "plan de Gobierno"). Sin sorpresas, los elegidos para los tres cargos fueron respectivamente García, Mauricio Mulder Bedoya y Jorge del Castillo. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2005, García fue declarado ganador por abrumadora mayoría de la elección primaria del partido, en la que compitieron además Luis Alvarado Contreras, Nancy García Carrillo y Ángela Valdez Olivera. Los acompañantes de García en la plancha presidencial para las elecciones de 2006 eran el vicealmirante retirado Luis Giampietri Rojas, candidato a la Primera Vicepresidencia, y la ex teniente de alcalde de Arequipa Lourdes Mendoza del Solar, candidata a la Segunda Vicepresidencia.

La gran mayoría de los más de 100.000 afiliados y simpatizantes que votaron en este proceso interno no concebía a otro candidato presidencial que no fuera el líder señero del aprismo en los últimos 23 años. Según una encuesta publicada días atrás por el diario *La República*, García, con una intención de voto del 12%, aparecía bastante rezagado tras la derechista Lourdes Flores y solo ligeramente por delante del ex presidente acciopopulista Valentín Paniagua y de un cuarto en discordia llamado a ser el más perturbador fenómeno de la política peruana desde la aparición de Fujimori en 1990: el teniente coronel retirado Ollanta Humala Tasso, candidato mestizo y *outsider* que desató la caja de los truenos con su discurso nacionalista, antisistema y muy crítico con el neoliberalismo y la globalización.

El padre y los hermanos de Humala, quien en 2000 había protagonizado una asonada militar en vísperas de la caída de Fujimori, hacían propaganda de una ideología extremista, el **etnocacerismo**, que defendía la supremacía de la "raza cobriza", situada en un plano de confrontación revanchista con las tradicionales élites blancas, y aceptaba como válidas las vías extraconstitucionales para llegar al poder, desde la insurrección popular al golpismo militar. Fundador y líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), aunque si bien concurría por cuenta de la UPP, Humala ya no quería ser identificado con la polémica doctrina de su familia, no obstante haberla pregonado en el pasado, e insistía en que el suyo era un nacionalismo no basado en la raza, sino de tipo "integrador", que tomaba como bases el "**socialismo andino-amazónico**", el antiimperialismo y el latinoamericanismo.

Para García, resultaba fundamental perfilarse como una alternativa de izquierda moderada o de centroizquierda, contraria a las atribuidas políticas aventureras o sectarias de su contrincante nacionalista, al que empezó a adjudicarse por doquier la posesión de una "agenda oculta" para el Perú de corte autoritario. Sin embargo, por el momento, la diana preferente de sus dardos era Flores, a la que quería desbancar en la primera vuelta, el 9 de abril, para luego batirse con Humala en la segunda vuelta. El escenario del balotaje se consideraba inevitable al no parecer factible la superación por Flores o Humala del 50% de los votos en la primera oportunidad, ni remotamente. Viéndolo así, correspondía al aprista invertir los mayores esfuerzos para meterse en la segunda ronda, ya que su punto de partida era más bajo. Si lo lograba, podía dar por ganada la Presidencia. Esta era la conclusión de un análisis que predecía la atracción prestada del voto de todos los partidarios de Flores, de Paniagua y, en general, de todos los votantes a los que Humala producía vivo temor. Una de las consignas más transmitidas por García durante la campaña fue la que identificaba a la jefa de la UN como la "candidata de los ricos". Consciente de cuán sumamente perjudicial era ese sambenito clasista, Flores se vio obligada a librar la campaña a la defensiva, lo que se tradujo en un enflaquecimiento de su empuje y en el fortalecimiento de García.

El *Plan de Gobierno 2006-2001* del PAP enumeraba diez grandes objetivos precisados en 468 puntos. Entre otros cambios, se contemplaba: la reforma de los tres poderes, la Constitución Política y la administración pública, inclusive el restablecimiento del Legislativo bicameral, para mejor cubrir "las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático en el contexto de una economía social de mercado", y para "fortalecer la democracia representativa y participativa"; avances decisivos en la descentralización y la regionalización del país, uno de los proyectos favoritos de García, que había dejado a medio realizar por falta de tiempo en su primera etapa presidencial; actuaciones vigorosas en el campo del desarrollo

humano, una "necesidad impostergable" que era "expresión de justicia social", priorizando la lucha contra la pobreza, la prestación de servicios universales de salud y educación, la mejora de la seguridad ciudadana y la erradicación de la desnutrición infantil; la puesta de la economía "al servicio de la población", lo que entrañaría asegurar una tasa de crecimiento anual del PIB del 7% (Toledo legaba una tasa del 6,5%), con generación de empleo y sin poner en peligro los equilibrios macroeconómicos, así como transferir recursos desde el gasto corriente hacia el gasto social y la inversión, y acometer una reforma tributaria integral, ampliando la base y eliminando exoneraciones fiscales; y, una "cruzada ética" contra los "flagelos" de la corrupción y el narcotráfico.

El Plan concedía importancia también a la "integración continental" del Perú y por ende propugnaba la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esta apuesta de García, continuista de la política del presidente Toledo –que firmó el tratado en Washington el 12 de abril-, le diferenciaba radicalmente de Humala, que quería mandar el TLC a la papelera a menos que fuera renegociado. Al salir a respaldar el TLC Perú-Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones, organización de integración económica y política que el Gobierno venezolano daba por "moribunda", García se ponía en contra de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), proyecto de colaboración y complementación integral con base en ideologías de izquierda y radicalmente hostil a los designios estadounidenses en la región que impulsaban Chávez, Fidel Castro y Evo Morales, los cuales confiaban en reclutar a Humala como cuarto socio.

El líder aprista llegó a la cita con las urnas del 9 de abril de 2006 con el paso a la segunda vuelta no contemplado por los últimos sondeos, que le daban una cuota máxima del 22% de los votos. En realidad, Humala, Flores y García terminaron librando una pugna bastante reñida, en particular los dos últimos, pero al final fue el aprista el que protagonizó la sorpresa de la primera vuelta, si bien lo complicado del escrutinio demoró la publicación de los resultados finales durante dos semanas: con el 24,3% de los sufragios, el ex presidente continuó en la liza que pasaba a entablar en solitario con Humala, destinatario del 30,6%. El 28 de julio de 2006 García, previa acreditación -el 21 de junio- por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente electo, se colocó por segunda vez en 21 años la banda bicolor del presidente de la República del Perú.

Con habilidad y pragmatismo, el flamante presidente arregló el respaldo para su equipo de Gobierno por los congresistas de UN, AP, Somos Perú, Perú Posible y Restauración Nacional. Con una considerable polémica esta vez, pues negociaba con un sector político que había sido su archienemigo y perseguidor durante la "década infame", García pactó también con la bancada fujimorista, de 13 miembros.

Que Alan García era un hombre de personalidad dinámica era de sobra conocido -más bien, había sido impetuoso, aunque ahora hacía gala de político maduro, ponderado, austero y dialogante-, así que no perdió el tiempo en la ejecución de varios proyectos bandera de su programa electoral, como la reducción por decreto de los salarios de representantes políticos y cargos del Estado, la campaña nacional de alfabetización, la extensión de los servicios de agua, electricidad y atención hospitalaria en zonas rurales rezagadas, y la puesta en marcha de importantes proyectos de desarrollo, como la nueva Zona Económica Especial, o zona franca, de Puno (que no tardó, sin embargo, en quedar estancada) y la revitalización del Ferrocarril Tacna-Arica.

En los años siguientes, el Gobierno iba a mostrar gran interés en realizar progresos en las redes de transportes, servicios y comunicaciones con obras de gran visibilidad, como el inconcluso Metro o Tren Eléctrico de Lima, relanzado en 2009, la ampliación del Puerto del Callao, la conclusión del último tramo de la carretera Interoceánica Sur para unir los puertos de la costa peruana y Brasil, la renovación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa, para el abastecimiento de varios distritos de la provincia capitalina, y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, en Lambayeque. Al mismo tiempo, García se apresuró a enviar gestos al capital inversor extranjero, en particular el estadounidense, muy presente en las concesiones mineras, para que no tuviera dudas de que Perú era un país de oportunidades y con plena seguridad jurídica.

El 5 de noviembre de 2006 el mandatario cumplió sus primeros cien días de gestión con unos niveles de popularidad todavía altos. Sobre la simbólica efeméride sobrevolaron los ecos de su alianza tácita con el fujimorismo, representado en el Congreso por la hija del presidente, Keiko Fujimori Higuchi, cabeza de la Alianza por el Futuro. Según observadores locales, esta alianza, poco menos que *contra natura* a la luz de los antecedentes aún frescos en la memoria, se apreciaba en el freno a la lucha anticorrupción, en una política económica alejada de la socialdemocracia y que más bien abrazaba los principios liberales conservadores, y en el impulso de la reforma del Código Penal para reintroducir la pena de muerte a los convictos de terrorismo, cambio que iba a ser rechazado por el Congreso en enero de 2007; en aquella votación, apristas y fujimoristas se quedaron solos.

Los peor pensados aseguraban que García apostaba por que Fujimori, reo en rebeldía con una orden de búsqueda y captura emitida por la CSJ, siguiera en Chile, a donde, imprudentemente, se había mudado en 2005 poniendo término a su refugio seguro en Japón, y no tuviera que responder ante la justicia de casa por delitos de lesa humanidad y corrupción. Sin embargo, el proceso de extradición abierto por las autoridades judiciales de Lima siguió su curso y en septiembre de 2007 el Gobierno de Santiago metió a su incómodo huésped en un avión rumbo a Perú, donde el ex presidente quedó preso a la espera de juicio.

Otra cuestión, ésta ya de índole privada, revoloteó sobre los primeros cien días del Gobierno de Alan García. Fue el reconocimiento por el presidente, hecho a finales de octubre en una declaración televisada a la nación, desde el Salón Dorado del Palacio de Gobierno y saliendo al paso de las especulaciones periodísticas sobre el tema, de que tenía un hijo de 20 meses de edad nacido fuera de su matrimonio con la primera dama, Pilar Nores. El pequeño, un niño "lindo y muy bello", se llamaba Federico Dantón García Cheessman y era el fruto de una relación sentimental con la economista Elizabeth Roxana Cheessman, surgida cuando él estuvo "lamentablemente" separado de su esposa entre abril de 2004 y octubre de 2005. García no mencionó a Cheessman por su nombre, sino que la llamó "una persona de altas cualidades".

Para pasmo general, Nores flanqueaba ante las cámaras a su adúltero marido, al que miraba y escuchaba con expresión seria y atenta. "Tengo la satisfacción de contar con la comprensión y el respaldo moral de mi esposa, que me demuestra a mí mismo y a todo el país su altísima dignidad, su condición de madre y su condición de dama", precisó García al hacer la presentación de su "sexto hijo". El niño, explicó el presidente, "como corresponde al deber", estaba "reconocido

desde el momento de su nacimiento", gozaba de "todos sus derechos" y había sido "asistido desde el primer día de su existencia".

La derrota del PAP en las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2006, calificada de "dolorosa" por su secretario general, Mauricio Mulder, y la dimisión en febrero siguiente de la ministra del Interior, la independiente Pilar Mazzetti Soler, blanco de duras críticas por las compras presuntamente irregulares de material para la Policía Nacional (Mazzetti fue sucedida en el cargo por Luis Alva Castro), pusieron sendos preámbulos al primer conflicto social grave, de los varios que iba a tener que enfrentar hasta el final del mandato, encajado por García.

Se trató de la protesta, iniciada en abril de 2007, de los cultivadores cocaleros del departamento andino de Huánuco, movilizados contra las instrucciones del Gobierno de erradicar los cocales de la región, considerados por aquel "cultivos amenazantes", y de recuperar los terrenos para la "buena agricultura". El presidente se negó a dialogar con los huelguistas de Huánuco, a los que acusó de estar "azuzados por los narcotraficantes", pero acto seguido se encontró con una cadena de protestas laborales en la minería, el sector pesquero, la función pública y otros colectivos profesionales. Otro foco de conflicto potencialmente explosivo se planteó en Andahuaylas, Apurímac, donde miles de campesinos iniciaron disturbios en demanda de mejoras salariales.

En julio de 2007 García cumplió su primer año de mandato en unas circunstancias paradójicas. Por una parte, la economía nacional, con un ritmo de crecimiento sobresaliente, del 8% (en 2008 la tasa iba a superar el 9%, muy por encima del promedio regional, aunque acompañada de una alza inflacionaria de cuatro puntos, hasta frisar el índice de precios el 6% anual), iba viento en popa gracias en buena medida a los altos precios con que se cotizaban los muchos minerales metálicos (cobre, plata, oro, plomo, estaño, zinc, bismuto, telurio, etc) que Perú extraía y exportaba a una amplia red de clientes (Estados Unidos, China, Chile, Canadá, Japón, Comunidad Andina, MERCOSUR), pero también por el aumento de la inversión, tanto pública como privada, y el consumo. Podía hablarse de una diversificación sin precedentes de los aportes al comercio exterior, donde sectores como la agroindustria y la manufactura tenían cada vez más presencia, si bien la minería seguía aportando casi dos terceras partes de las exportaciones.

El Gobierno no hacía más que anunciar buenas noticias, como que el porcentaje de población en situación de pobreza se había reducido cinco puntos, pasando del 49% al 44%, en un tiempo récord, si bien los detractores del Ejecutivo aseguraron que la mudanza aritmética no tenía nada de meritorio, pues simplemente obedecía al nuevo método para calcular la pobreza monetaria. Pero, por otro lado, el creciente descontento social ponía de manifiesto que multitud de peruanos no veían por ningún lado los nuevos progreso y bienestar pregonados por García y sus colaboradores.

El terremoto registrado el 15 de agosto de 2007 en la costa central puso a luctuoso examen al Perú, el país que prosperaba a la luz de las envidiables cifras de su PIB. En opinión de un gran número de observadores locales e internacionales, la capacidad de respuesta del Estado frente a esta tragedia, no excepcional en un país que sabía como el que más de movimientos telúricos, dejó mucho que desear y, al menos en los primeros días, no llegó al aprobado. El seísmo, el más destructivo desde la catástrofe de Áncash de 1970, de magnitud 8 y con epicentro a 40 km al oeste

de Pisco y a 150 al sudoeste de Lima, dejó un balance de 596 fallecidos, dos millares largos de heridos, 76.000 viviendas destruidas y 431.000 personas damnificadas en mayor o menor medida.

La verificación sobre el terreno de las devastaciones por García, quien, con su locuacidad habitual, aseguró que "ningún peruano" iba a morir de hambre o de sed, llamó "malditos" a los comerciantes que se atrevieran a subir los precios de los productos de primera necesidad y cargó contra los periodistas por su tendencia a "atemorizar con malas noticias", no ayudaron, más bien al contrario, a mitigar el enfado de las víctimas, que clamaron contra la tardanza de los equipos de socorro en llegar a las zonas afectadas -muchas, parajes rurales de difícil acceso-, la desorganización, una palmaria falta de medios y la ausencia de fuerzas del orden para atajar la ola de saqueos en ciudades como Pisco, a donde el Gobierno hubo de despachar unidades blindadas de la Infantería de Marina para restablecer la seguridad.

En el otoño de 2007, García, más que el proceso penal a Fujimori, cuyas resoluciones judiciales el Gobierno, en lo que le tocase, iba a cumplir y a hacer cumplir "sin odio, ensañamiento y venganza", encontraba inquietante el resurgimiento de Sendero Luminoso, la otrora poderosa organización guerrillera descabezada y laminada por Fujimori pero nunca completamente aniquilada. La entrada en el negocio criminal de la droga había convertido a lo que quedaba del senderismo en una banda narcoterrorista ciertamente minúscula, pero capaz de infligir daños a las Fuerzas Armadas en parajes selváticos e inhóspitos como el VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene) de la provincia ayacuchana de Huanta, una zona plagada de cultivos cocaleros y donde el Estado apenas se hacía notar.

Por lo demás, la segunda mitad del mandato de García conoció un recrudescimiento de las protestas sociales. En agosto de 2008 las comunidades indígenas y campesinas amazónicas se apuntaron una victoria en su pulso con el Gobierno al lograr, tras casi dos semanas de paros y manifestaciones, que el Congreso, donde el PAP se quedó solo en su invocación del "progreso" de estas tierras del interior, derogara dos polémicos decretos legislativos, el 1015 y el 1073, dirigidos a facilitar la compraventa por capital privado de tierras selváticas propiedad de la población nativa y susceptibles de ser explotadas para el cultivo de biocombustibles y el bombeo de hidrocarburos.

Las piezas legales derogadas formaban parte de la llamada *Ley de la Selva en el Perú*, marco normativo desregulador enmarcado en el TLC con Estados Unidos y que estaba poniendo a las comunidades originarias de Amazonas en pie de guerra, las cuales amparaban sus demandas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, de todos los cuales el Gobierno peruano era signatario y estaba obligado a acatar. Sin embargo, las escaramuzas continuaron a propósito de otros decretos de la Ley de la Selva que los indígenas consideraban contrarios al derecho internacional, amén de inconstitucionales.

El conflicto ganó encono y la violencia se desbordó el 5 de junio de 2009, cuando un operativo de la Policía contra cientos de activistas que realizaban unos bloqueos en el lugar conocido como la Curva del Diablo, en Bagua, departamento de Amazonas, terminó en una auténtica matanza: 23

agentes del orden, de los que 11 estaban retenidos por los nativos awajún, que los asesinaron a machetazos, y un número indeterminado de civiles, una decena como mínimo, estos balaceados, resultaron muertos en las refriegas provocadas por el intento policial de levantar el bloqueo viario y de rescatar a los compañeros en manos los indígenas alzados y provistos de armas blancas. El Gobierno impuso el toque de queda en toda la zona y ordenó la captura del dirigente indígena Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y autor de un llamamiento a la insurgencia, el cual halló asilo en la Embajada de Nicaragua en Lima. Pero también se resignó, con el fin de rebajar los ánimos y evitar nuevos derramamientos de sangre, a derogar otros dos decretos de la Ley de la Selva, el 1064 y el 1090. El conocido como *Baguazo*, que conmocionó al país, fue la crisis más grave que García tuvo que afrontar en su segundo mandato presidencial.

Humala, el etnocentrismo nacionalista

La galopada de Humala en las encuestas continuó hasta el mismo final de la campaña. Un muestreo postrero publicado (en Internet, ya que la ley prohibía divulgar encuestas en territorio peruano la semana anterior a la cita con las urnas) por la firma Datum el 8 de abril le concedió el porcentaje más alto desde que comenzó el seguimiento de los candidatos, el 31,9%. Por detrás tenía a Fujimori con el 22,3% y, más rezagados y sin posibilidades de colarse en la segunda vuelta, a PPK con el 17,3% y Toledo con el 15,3%.

La votación del 10 de abril de 2011 produjo unos resultados casi idénticos a los pronosticados: Humala se ponía en cabeza con el 31,7% y pasaba a disputar la segunda vuelta con Fujimori, receptora del 23,5%. Kuczynski, Toledo y Castañeda quedaron apeados. El candidato de la izquierda dibujó un mapa electoral muy parecido al de la primera vuelta de 2006, al ser el más votado en 120 de las 195 provincias y en particular en las meridionales de amplia población indígena, donde su dominio era abrumador. En el área metropolitana de Lima y Callao, residencia del 28% del electorado, se impuso el liberal Kuczynski, mientras que Fujimori lo hizo en el departamento de Lima y los del noroeste.

En sus primeras palabras tras conocer los resultados, el nacionalista empleó su tono más conciliador e integrador. Según él, resultaba necesario "trabajar por el consenso y la unidad en el país, [para] que estas elecciones no nos dividan, sino que nos unan". "Estamos dispuestos a ampliar y hacer una gran mesa de gobierno con todas las fuerzas políticas, sociales y laborales que quieran trabajar con nosotros", añadió, ya que: "Perú quiere un cambio sin sobresaltos, persistente, que haga la gran redistribución de la riqueza [y muestre] que el desarrollo económico no es sólo para unos pocos".

Los temores que suscitaba Fujimori eran como mínimo igual de intensos, aunque de una índole bien distinta. De ella, a diferencia del nacionalista, no se esperaba ninguna revisión del modelo de libre mercado –si bien la aspirante de Fuerza 2011 sí venía haciendo hincapié en los programas de asistencia social-, pero sus manifiestos, que reivindicaban los logros del régimen de su padre en la macroeconomía y la seguridad, daban pábulo a alarmantes advertencias sobre la instalación de un Gobierno neofujimorista capaz de arrastrar al país a una nueva noche de corrupción, autoritarismo e impunidad. Aunque insistió en que, de llegar al poder, no indultaría a su encarcelado padre, condenado a un total de 44 años de prisión por múltiples casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, y pidió perdón por los "delitos" cometidos –eso sí, por otros, con Vladimiro

Montesinos a la cabeza- entre 1990 y 2000, su defensa a capa y espada de la inocencia y la honorabilidad del reo estorbó a su credibilidad.

Humala también se sintió obligado a tranquilizar, con un ojo puesto en los mercados (la Bolsa de Lima experimentó caídas tras saber los resultados de la primera vuelta) y el otro en la clase media limeña y los indecisos. En entrevistas a medios nacionales y extranjeros, repitió que la generación de crecimiento sería preservada, que no habría reforma constitucional para permitir la reelección presidencial automática y que el modelo venezolano "no era aplicable al Perú", país que debía "construir su propio camino". El 24 de abril, en el programa televisivo *El Dominical*, el aspirante hizo su desmarque más contundente de Chávez hasta la fecha, prácticamente un repudio. Sus palabras textuales fueron: "Nosotros le hemos dicho a Chávez que no se meta en el Perú (...) Le dije: usted no es nadie para juzgarme a mí si soy buen soldado o mal soldado, un extranjero no va a juzgarme a mí" (...) Hemos dicho que el modelo venezolano no es aplicable en Perú y que Chávez se quede en Venezuela".

Cuando la elección del 10 de abril dinamitó ese panorama, Vargas Llosa se apresuró a posicionarse: si en la primera vuelta había votado por Toledo, en la segunda lo haría por Humala, aunque "sin alegría y con muchos temores", ya que el nacionalista le parecía "Chávez con un lenguaje ligeramente abrasileñado", esto era, "la catástrofe". Con todo, peor sería la alternativa, pues Keiko en la Presidencia significaría "abrir las cárceles para que todos los ladrones, asesinos y torturadores, empezando por su padre y el siniestro Montesinos, salgan a la calle a sacar la lengua a todos los que han defendido la democracia en Perú". Siguiendo con las dicotomías límite, lo que el Perú se jugaba el 5 de junio era ahora "el suicidio o el milagro". El milagro lo esperaba Vargas Llosa de Humala, del que confiaba que hiciera honor a su nuevo discurso dirigido al centro.

Humala agradeció el respaldo "crítico y exigente" de Vargas Llosa, al que se sumó el de Toledo; el ex presidente iba a votar por él porque no quería "regresar al pasado oscuro de los noventa". Fujimori, en cambio, se aseguró los apoyos de Kuczynski (con el que firmó un "Pacto por el Perú") y Castañeda, amén del favoritismo descarado de los poderes empresariales y financieros, los principales grupos de comunicación privados y sectores de la Iglesia Católica. Los apristas se dividieron sobre la cuestión: la cúpula partidaria, al igual que el presidente García (éste, de manera implícita), deslizó sus preferencias por Fujimori, pero las bases se inclinaron por Humala.

El 5 de junio, jornada de fiesta democrática que fue empañada por el ataque en la víspera por Sendero Luminoso contra una patrulla militar en Cuzco con el resultado de cinco soldados asesinados, Humala venció con el 51,5% de los votos. Tras proclamarse vencedor, el presidente in pectore anunció la convocatoria de "los mejores técnicos independientes" de cara a la formación de un "Gobierno de concertación, esperanza y cambio", un Gobierno de "ancha base", "donde nadie se sienta excluido y donde todos estén representados". Asimismo: "Vamos a promover más inversiones, vamos a llevar una economía de mercado que es la consolidación, el fortalecimiento del mercado interno", proclamó.

Se trataban de mensajes de sosiego para quienes le habían votado con dudas y reticencias, sólo para parar a Fujimori. Los humalistas convencidos recibieron alocuciones específicas: "Hoy renuevo mi compromiso con el pueblo peruano de impulsar el crecimiento económico con inclusión social". Y: "No se puede hablar de que el Perú avanza si hay tantos peruanos en la

pobreza. Vamos a corregir eso con políticas que resuelvan el problema de la educación, de la salud, de las infraestructuras, a la vez que le cerraremos el paso a la corrupción". El término medio asomó en otras afirmaciones, como: "Vamos a continuar lo bueno que se ha venido haciendo, vamos a corregir lo malo y vamos a hacer la transformación".

Por de pronto, los mercados enviaron su señal de decepción por el desenlace de las llamadas "elecciones del miedo": el parqué limeño sufrió ingentes pérdidas y ante la magnitud de la caída, que alcanzó el 9%, hubo de suspender las operaciones. El desplome bursátil se cebó con las acciones de las empresas mineras, cuyas sobreganancias estaban en el punto de mira fiscal de Humala. Por lo que se veía, los inversores aguardaban con ansiedad la revelación de los nombres de los responsables económicos del próximo Ejecutivo, a estrenar el 28 de julio, que esperaban procedieran del círculo toledista.

Humala no realizó cambios estructurales y fue casi un seguidismo a lo iniciado por García. Mas discurso que acciones y poco sustento técnico, mucha influencia de una esposa socióloga que se introdujo a definir situaciones como asensos en el ejército y la policía y acciones en áreas de cocaleros. Todo ello lo deterioró y lo condujo a una encrucijada cuando fue acusado de sobornos y de corrupción. La esposa implicada en ello también. Esto lo llevara a ser juzgado posteriormente e incluso encarcelado.

PPK, el ex ministro de Toledo y aliado de la hija de Fujimori. Un camaleón político

Cuanbdo gano las elecciones, Pedro Pablo Kuczynski ofertó un gabinete de lujo. El parlamentario opositor Víctor Andrés García Belaúnde, a su vez, dijo: "Gobierno de lujo no, les gusta el lujo, practica el lujo, les encanta, todo lo que brilla para ellos es oro y el Gobierno, por supuesto, brilla muchísimo" en septiembre de 2017, según el medio digital Lucidez.

Iván Lanegra, profesor peruano de Ciencias Políticas, dijo a BBC Mundo que "eso de 'gobierno de lujo' fue más un calificativo que usó el propio gobierno". El mismo PPK se refirió de esta forma auspiciosa a los ministros que había elegido. "Es un gabinete de lujo, de la mejor gente de todo el Perú", dijo a los medios. "Para los sectores cercanos sí (era un "gobierno de lujo"), pero creo que entre la ciudadanía en general había más un sentimiento de alivio porque Keiko Fujimori, a la que consideraban una amenaza mayor, no ganara", aclara Lanegra.

El analista reconoce que sí había expectativa con respecto a las capacidades de Kuczynski para resolver los problemas económicos de Perú, debido a su experiencia en economía: "En ese punto sí diría que la expectativa fue grande".

Pero en el año y ocho meses que duró el gobierno, el equipo de PPK se limitó a "continuar las políticas de hace casi 20 años", señala Lanegra, en lugar de implementar cambios.

Además, el equipo no parecía reunir los requisitos políticos para enfrentar a un congreso dominado por la oposición, es decir, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.

Pero hubo otros hechos que contribuyeron a desvanecer la percepción de gobierno de "lujo". La caída de ministros. El primer ministro de Educación de PPK, Jaime Saavedra, tuvo que dejar su cargo en diciembre de 2016, pese a sus altos índices de aprobación.

El Congreso, dominado por Fuerza Popular, censuró a Saavedra, debido a presuntos actos de corrupción. Según El Comercio, la destitución de su ministro más popular fue "un fuerte golpe para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)".

Algunos analistas como Lanegra consideran que PPK mostró debilidad al no defender mejor a su ministro. Después de Saavedra, tres ministros más salieron del gabinete tras acusaciones de corrupción o ineficiencia formuladas por el Congreso. Uno de ellos fue Martín Vizcarra, posterior presidente de la República, y en ese entonces, ministro de Transportes hasta mayo de 2017. Le siguieron Alfredo Thorne, de Economía, Marilú Martens, de Educación, y junto con ella, casi todo el gabinete que funcionaba en el momento.

Gracias a estas entradas y salidas en el gabinete, en menos de dos años, PPK llegó a tener más ministros que Ollanta Humala en cinco.

El escándalo Odebrecht

Las acusaciones de haber trabajado para Odebrecht mientras era funcionario público, entre 2001 y 2006, fueron las que pusieron al mismo PPK en la mira del Congreso y las que prácticamente desataron su agonía política.

En diciembre, la constructora Odebrecht, protagonista en numerosos escándalos de corrupción en varios países de América Latina, informó al Congreso peruano que había pagado US\$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski.

La divulgación de unos videos que supuestamente revelarían la existencia de intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski causó polémica y calentó el ambiente político en Perú este martes.

Los videos fueron mostrados por el partido Fuerza Popular, que encabeza por Keiko Fujimori, y tendrían como uno de sus protagonistas a su hermano Kenji Fujimori, quien supuestamente aparece haciendo gestiones para salvar la cabeza del mandatario peruano, quien este jueves será sometido a un intento de destitución por parte del Congreso.

En diciembre pasado, Kenji y otros 9 políticos fujimoristas desafiaron abiertamente a la directiva de su partido cuando se abstuvieron de votar a favor de la destitución de Kuczynski por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

El sucesor Vizcarra, la figura secundaria en la política de Perú. Ahora presidente.

Después de que el Congreso aceptara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el hasta ahora vicepresidente tomó posesión este mismo viernes como nuevo mandatario del país sudamericano.

Vizcarra, ingeniero limeño de 55 años que venía simultaneando su cargo de vicepresidente con el de embajador en Canadá, sustituye a un PPK acosado por las sospechas de corrupción en relación con el caso Odebrecht y amenazado con una nueva votación para destituirlo en el Congreso.

No en vano, el nuevo presidente se juramentó con un discurso contra la corrupción y, quizá para hacer valer uno de los activos de su capital político, destacó: "La educación será central en nuestra gestión".

El pleno del Parlamento declaró la "permanente incapacidad moral" del mandatario en el juicio político abierto contra él, que se produce cinco meses antes de las elecciones generales en el país. La llamada "moción de vacancia" salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados).

La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014). El Congreso de Perú destituyó al presidente, Martín Vizcarra, tras dos años y ocho meses en el cargo. La moción de censura por "incapacidad moral permanente" salió adelante después de que el mandatario estaba siendo investigado por la supuesta recepción de sobornos a cambio de contratos de obras públicas entre 2013 y 2014, cuando desempeñaba el cargo de gobernador de Moquegua, en el sur del país. Se trataba del segundo intento del Parlamento por desalojar a Vizcarra del poder, después de que hace tan solo dos meses los congresistas rechazaran otra iniciativa motivada por un supuesto delito de tráfico de influencias. El dirigente negó las imputaciones. "Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad", aseguró Vizcarra en Twitter.

De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe del Estado —dos tercios de la Cámara— y la moción superó con creces ese umbral al alcanzar los 105 votos a favor, frente a 19 en contra y cuatro abstenciones. También varios miembros y líderes de los grupos políticos que promovieron desde septiembre la salida de Vizcarra están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos. El lunes apoyaron la iniciativa otros partidos como el Frente Popular Agrícola del Perú y algunos parlamentarios del izquierdista Frente Amplio.

Luego asumió el cargo de presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, un político que tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre, pues permitió a un congresista —sobre el que pesaban acusaciones constitucionales— que difundiera en un pleno del Congreso audios de conversaciones del presidente y su entorno sobre la contratación irregular de un amigo de Vizcarra como consultor del Ministerio de Cultura.

Minutos después de la decisión del Congreso, se sucedieron las caceroladas en los distritos de clase media de Jesús María, Barranco, Chorrillos y Miraflores en Lima, y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuya bancada votó en contra de la destitución de Vizcarra, llamó a manifestarse en la plaza San Martín, una de las principales de la capital. Según una encuesta de finales de octubre de Ipsos Perú, el 78% de los ciudadanos estaba a favor de que Vizcarra continuara en el cargo y que las investigaciones siguieran su curso —tanto sobre su influencia en la contratación irregular de su amigo, como sobre los supuestos sobornos— cuando finalizase su mandato, previsto en julio del próximo año. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió al Parlamento reconsiderar su posición debido a la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa el país sudamericano, uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19, con más de 920.000 contagios y cerca de 39.000 muertos.

Un centenar de personas llegó durante la noche del lunes a la Plaza de Armas de Lima para protestar contra la decisión del Parlamento. Se había convocado además un plantón la tarde del martes en los alrededores del Congreso, media hora antes del comienzo de la sesión en la que Merino jurará el cargo, pero el Parlamento adelantó después la hora a las diez de la mañana. En la ciudad de Trujillo, en la costa norte, otro grupo de ciudadanos se ha congregado esta noche con

carteles en los que se leía “La democracia se defiende” y “Congreso golpista”, según informó la emisora Radioprogramas. En Huancayo, en la sierra central, también protestaron unas 200 personas.

Pasadas dos horas de la votación, el jefe del Estado —acompañado de sus ministros— declaró que no tomará ninguna acción legal contra la destitución, pese a no estar de acuerdo con ella. “La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En el hemiciclo se ha impuesto no la razón, sino el número de votos: los representantes del pueblo aparentemente se olvidaron de a quién representan. No me escucharon, o si me escucharon, no me entendieron. Salgo del Palacio de Gobierno con la frente en alto como cuando ingresé hace 18 meses”, añadió.

Merino y Sagasti, Los interinatos congresales.

El 9 de noviembre del 2020, el congreso peruano sorprendió votando por la vacancia del presidente Martín Vizcarra, con 105 votos a favor de un total de 130 congresistas cuando solo faltaban 5 meses para las elecciones generales. Era el cuarto proceso de “vacancia por incapacidad moral permanente” en el quinquenio del gobierno iniciado en 2016. La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción por supuestos hechos acontecidos en su etapa a como gobernador de la región de Moquegua en los años 2011 y 2014. Vizcarra se mostraba firme y comprometido en la lucha contra la corrupción a pocos meses de asumir la presidencia y convocó un referéndum para reformar cuatro capítulos de la constitución incluyendo uno referido a la reelección de congresistas y otra tendiente a reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos.

Luego de la vacancia de Vizcarra el entonces presidente del Congreso Manuel Merino asumió la presidencia el 10 de noviembre en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones. La organización Amnistía Internacional, manifiesta que ha recibido fotos y videos donde se muestran efectivos de la policía nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas (Amnistía Internacional, 2020). Así mismo, Perú atravesó una de las crisis más agudas de su historia reciente ya que se presenciaron cacerolazos, marchas, protestas, muertes e incertidumbre, además de una cascada de denuncias en las redes sociales que se resolvió con la elección de un nuevo presidente.

Luego de más de 24 horas en el que Perú no tuvo presidente, el intelectual Francisco Sagasti Hochhausler, del centrista Partido Morando asumió el cargo de manera transitoria. En su discurso de asunción priorizó la batalla contra la pandemia, la transparencia en las elecciones presidenciales, la lucha contra la corrupción e impulsar la recuperación de la educación. Sagasti se enfrenta al desafío de devolver la estabilidad a un país convulsionado por el rechazo ciudadano a su clase política y su principal objetivo es garantizar que las elecciones presidenciales pautadas para el 11 de abril se cumplan en tiempo y forma.

A diferencia a lo que ocurrió con Manuel Merino, los países vecinos tales como Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile y varios organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron rápidamente para reconocerlo como nuevo mandatario y le ofrecieron todo su apoyo para lograr una “sociedad libre, inclusiva y democrática” (El Comercio, 2020).

El Plan bicentenario hacia el 2021 es el “plan estratégico de desarrollo nacional basado en el acuerdo nacional y en las 31 políticas de estado que suscribieron las fuerzas políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el país” (MRE, 2021). A modo de ejemplo, Sagasti debe promover el objetivo nacional 3 que implica lograr que el estado se oriente al servicio de los ciudadanos y promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.

Castillo y su asenso democrático dificultoso y su gobierno y gobernabilidad más dificultoso aun

Castillo ganó elecciones en dos rondas. En la segunda quedó enfrentado a la hija de Fujimori. Eso le permitió decantar posiciones, además una vez que se había producido la hecatombe de corrupción en el Perú, que destituyó primero a Kuczynski y luego a Vizcarra, ese era el tema del momento. El suicidio de Alan García, que prometió que nunca entraría a la cárcel, y que realizó esta acción, cuando los agentes lo iban a detener en su domicilio, ayudó a que esto sucediera. Castillo tuvo que bregar bastante para que su posición decantada con el Fujimorismo, le permita alcanzar la presidencia. También ayudó que el hermano de la hija de Fujimori se pusiera en disputa con ella, por la herencia fujimorista.

La izquierda peruana vivió un dilema de consecuencias todavía desconocidas. Entonces debió elegir entre apoyar a un candidato semidesconocido, un profesor de escuela venido de los Andes y aupado por un partido leninista, populista y retrógrado, o dejar paso al fujimorismo, el régimen corrupto y clientelar que lleva tres décadas medrando en la política nacional, representado en las elecciones de 2021 por Keiko Fujimori. Optó por lo que consideraba que era el mal menor: Pedro Castillo.

Una vez en la presidencia, Castillo ha tenido 10 meses vertiginosos e inestables, con 29 cambios de ministros y mucha improvisación. El Congreso, donde es minoría, amenaza constantemente con destituirlo, como ha hecho años atrás con otros presidentes. La Cámara, *de facto*, se ha convertido en un instrumento obstruccionista. Para evitar que lo echen, el mandatario ha formado su Gabinete con miembros de los partidos que le dan sus votos para sobrevivir. El resultado es un cuerpo extraño que no ha logrado estabilizar el funcionamiento del Gobierno. En el horizonte, sin embargo, aparece un pañuelo blanco. El Congreso y Castillo se han dado una tregua para atemperar el ambiente.

La socióloga Anahí Durand (Lima, 43 años), presidenta de Nuevo Perú, uno de esos partidos de izquierda que se vio en la obligación de tomar una postura clara, fue la primera ministra de la Mujer que tuvo Castillo, aunque fue destituida a los seis meses para poner a una política de corte conservador. Durand, sin embargo, no es catastrofista acerca de la gestión del presidente y cree que la oposición, que controla el Congreso, trabaja en acabar con él desde el primer día. Considera que este clima de ingobernabilidad conduce a Perú a salidas antidemocráticas.

Una vez presidente de Perú Castillo ha encarado 8 crisis de gabinete o renunciadas a ministerios. Además, sus constantes atropellos en política exterior, han denotado una errabunda acción de gobierno en materia de política exterior.

Las renuncias de los ministros apuntan a la incapacidad de lograr acuerdos políticos. Por ejemplo, la ex ministra Vásquez (tercer gabinete renunciante) renunció por lo que ella definió como "imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país". Unas palabras que harían alusión a las divisiones y desencuentros que existen en el Ejecutivo para llevar las riendas de la nación andina y que ya se han hecho patentes en ocasiones anteriores.

Vásquez publicó este lunes en Twitter su carta de renuncia, en la que afirmó que el Gobierno ha llegado "a un momento crítico" con la crisis generada en el Ministerio del Interior, que consideró parte de "un problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado". La ex jefa del Gabinete reafirmó su "preocupación" por la necesidad de hacer reformas en el Estado y la necesidad de que se produzcan cambios para "avanzar".

La titularidad del Ministerio del Interior en Perú quedó vacante por cuarta vez luego de que el jefe de Estado peruano finalmente aceptara la renuncia del ministro Avelino Guillén, que presentó su dimisión el pasado viernes 28 de enero.

Guillén manifestó su deseo de abandonar el cargo como protesta por una serie de nombramientos, bajas y ascensos de altos cargos dentro de la Policía Nacional. Una situación por la que pidió públicamente la renuncia del dirigente de la institución, el comandante general Javier Gallardo.

Los desacuerdos en esta materia entre Guillén y Gallardo desataron varias semanas de controversias en las que resultó salpicado el presidente Pedro Castillo, pues el Congreso acusó al mandatario de presuntamente presionar por los cuestionados cambios al interior de la Policía. El presidente fue fuertemente cuestionado por varios legisladores, que consideraron que no definió si respaldaba a su ministro o al jefe de la Policía. Tras esto, aceptó la renuncia de su ministro de Interior y además removió de sus funciones al director de la institución policial.

El escenario pudo haber sido distinto si la oposición hubiera dicho: 'Dejémoslo trabajar'. Hubiera sido muy distinto una oposición democrática que dijera que ellos ganaron, qué vamos a hacer. Que empezaran a trabajar y hacer oposición en lo que haya que oponerse, y trabajar dentro de las líneas en lo que haya que apoyar. Pero ese escenario nunca estuvo en la cabeza de Fuerza Popular o Renovación Popular o Avanza País. Primero negaron cualquier posibilidad de triunfo de Castillo —con el tema del fraude—, y luego ya, instalado en el Congreso, miraron desde el día uno fórmulas legales para sacar al presidente. Nunca estuvo en su cabeza un escenario democrático en el cual ellos pudieran trabajar.

Castillo se basa en una coalición muy precaria y sin mayoría en un régimen que ya se viene deteriorando desde 2016 va a tener muchas menos posibilidades de hacer un Gobierno exitoso con una oposición de ese tipo. Definitivamente, el tema es más de fondo, ahora dicen: 'Que se vayan todos', pero con un sistema cerrado con fuerzas políticas que bloquean el ingreso de nuevas fuerzas, estamos en un momento bien entrampado.

Hay temas a los que no se les puso empeño, como a la reforma tributaria. Siempre está muy presente el tema del Congreso, donde Castillo no tiene mayoría ahí, como no hay una correlación de fuerzas favorable, eso obliga a un permanente cálculo de cuáles se pueden avanzar más que otras: por ejemplo, la reforma agraria está en curso. Hace falta aún una visión más integral y estratégica que nos diga que este es el Gobierno del cambio. Eso está faltando construir.

Nuevo Perú (fuerza de apoyo a Castillo) insiste en ingresar al escenario político como tal, porque la izquierda está representada por Perú Libre y Juntos por el Perú, que a estas alturas casi no tiene vida orgánica. Es posible tener espacio en una representación de diversidad de luchas sin sumarse a las voces complacientes ni golpistas y abrir un debate constituyente. Por ahí va la salida a la crisis.

No hay un pronóstico catastrófico. La vida cotidiana sigue. El presidente tiene menos atribuciones y facultades, y eso ameritaría un debate nacional, al menos pasar por un referéndum. El presidente parece ser un hombre honesto, aunque acaban de denunciar a él, su esposa y cuñada de ofrecer obras en comunidades con una empresa constructora. Lamentablemente, tiene que afinar mucho más su entorno al trabajar en la gestión pública, esa es una urgencia. No es alguien que está cobrando coimas tipo Odebrecht, o cupos para el contrato de PetroPerú.

2.3. Bolivia

La caída del sistema de partidos y la crisis política neoliberal

Después de la recuperación de la democracia en Bolivia, en 1982, sobrevino un primer gobierno de una alianza de izquierda: la Unidad Democrática y Popular UDP, que encabezó Hernán Siles Zuazo, hombre del nacionalismo revolucionario del MNRI, que hizo la revolución de 1962, asociado al MIR de Paz Zamora y al PCB. Una gestión desastrosa, con una bolivianización forzada sin respaldo de divisas y bajas reservas fiscales, incrementos salariales, que llevaron a una espiral de incremento de déficit fiscal, incremento de precios, que luego de sendas huelgas de la Central Obrera Boliviana dirigida por Juan Lechín (hombre de la revolución del 52' también), se traducían en nuevos incrementos salariales, que reiniciaban el circuito, hasta provocar una hiperinflación de más de 10.000%. Un desliz de un colaborador de Siles, que contactó a narcotraficantes, le generó un juicio político que se resolvió en el parlamento con su renuncia y un adelantamiento de elecciones.

De allí en adelante, sobrevino una serie de gobiernos de alianzas: Paz Estenssoro (1985-1989), Paz Zamora con el apoyo de Banzer, su archi-enemigo en la dictadura de Banzer (1989-1993), Sánchez de Lozada del MNR (1993-1997) que había sido ministro de Paz Estenssoro, Banzer y Quiroga (1997-2002), otra vez Sánchez de Lozada (2002-2003). Este ciclo tuvo como denominador común, las políticas neoliberales: Paz Estenssoro la Estabilización Económica luego de la hiperinflación, consistente en un bolsín de dólares en el Banco central, que administró la demanda y la oferta de divisas, reforma monetaria que eliminó 6 ceros y transformó el Peso Boliviano en Bolivianos, la reducción de gasto público, que implicó el despido de trabajadores de empresas públicas como la minera COMIBOL y la petrolera YPFB, además de la de telecomunicaciones ENTEL (llamada eufemísticamente "relocalización"), la liberalización laboral, y otras medidas más. Paz Zamora inició la privatización de empresas públicas. Sánchez de Lozada, ejecutó una privatización de empresas públicas, bajo el nombre de capitalización, cediendo el 51% de las acciones de 7 empresas públicas, las más grandes e importantes, además de una reforma de Estado con descentralización municipal y una reforma educativa, reforma en el mercado de tierras y legislación forestal. Banzer y Quiroga continuaron el ciclo con reforma judicial, ataque a las plantaciones de coca, lo que devendría en el potenciamiento del liderazgo de su líder Evo Morales, además de medidas de libre mercado y de libre comercio exterior, así como de apertura crediticia.

El segundo gobierno de Sánchez de Lozada realizó una reforma en salud con un Seguro para niñ@s y mujeres embarazadas más amplio del que inició en su primer gobierno, y su pecado estuvo en intentar exportar gas por Chile con destino a EEUU. La resistencia en El Alto, 60 muertos de por medio, provocó su renuncia y el fin del cilio neoliberal.

Los gobiernos de transición de Carlos Mesa –vicepresidente de Sánchez de Lozada, que se alejó de la represión en El Alto- y de Rodríguez Veltzé, solo terminaron de consolidar el potenciamiento de Evo Morales. El mismo, había fundado el MAS, había sido expulsado del parlamento, por razones poco claras y su liderazgo estaba *in crescendo*, además de aglutinar fuerzas sociales corporativas que le dieron una conformación muy particular. El MAS era una confederación de movimientos sociales o para ser más precisos, de grupos de interés.

Evo Morales, la creación del Estado Plurinacional

En ese escenario de crisis de los partidos neoliberales o comprometidos con políticas neoliberales, es que surge Evo Morales. Esa transición de esos gobiernos neoliberales a Evo duró de 2003 a 2005, en que gana las elecciones con el MAS. Un MAS conformado por grupos de interés como la Confederación Única de Trabajadores campesino de Bolivia –CSUTCB- (sindicato), la Confederación de Interculturales de Bolivia (antes colonizadores) –CNIB- (sindicato), las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba (sindicato), la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia –FENCOMIN – (organización corporativa), la Federación de Juntas vecinales de El Alto –FEJUVE El Alto- (organización social), y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (organización social). Fuera de las dos últimas, todas eran clásicos grupos de interés. Sólo la central obrera Boliviana se mantuvo al margen de esta conformación inicial.

Esto es importante, porque, Evo Morales había criticado el cuiopteo del gobierno por parte de los partidos políticos neoliberales y el procedería de la misma manera, con el cuoteo entre las organizaciones que conformaban el MAS. Con el añadido, que las mismas entrarán al gobierno para buscar beneficiar con políticas públicas a sus sectores, no al conjunto de la ciudadanía.

Las políticas de Evo Morales en su primer gobierno (2006-2011) fueron dos básicamente: Nacionalización de hidrocarburos y Asamblea Constituyente. Ambas altamente exitosas, ya que con la primera consolidó el logro que, en gobiernos anteriores, en el de Mesa con un referéndum, el pueblo boliviano, ya había aprobado y generó recursos adicionales para el Estado, en un momento de alza del precio del petróleo. La Constituyente producirá una nueva Constitución para un nuevo Estado, el Estado Plurinacional, con Buen Vivir; autonomías departamentales, municipales e indígena originario campesinas; aprobó que la salud y la educación sean tratados de manera plurinacional; la justicia se volvió plural: indígena y ordinaria; la economía plural con 4 economías: estatal, de mercado, social cooperativa y comunitaria, planteándose que la estatal sea la preeminente; etc. Esta nueva Constitución se aprobó mediante Referéndum el 2009 y entró en vigencia inmediatamente. Ganó Referéndums revocatorios Evo Morales y logró con los mismos, que dos Prefectos de oposición pierdan su cargo: Manfred Reyes Villa de Cochabamba y José Luis Paredes de La Paz.

Un éxito más como resultados que como gestión. El segundo gobierno de Evo Morales de 2011 a 2015 le proporcionó espacio para implementar la nueva Constitución. Continuó con las nacionalizaciones en sectores como telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles,

aeronavegación, e incluso ingresó a nacionalizaciones en sectores de agua potable y alcantarillado nacionalizando empresas cooperativas de estos servicios, especialmente en poblaciones intermedias y pequeñas del Beni, Pando y Tarija. Intervino por encima de autoridades departamentales con un sistema de atención denominado fronterizo, con obras directas en áreas pre seleccionadas. Intervino en las Autonomías y les disputó recursos y competencias. Se consolidó políticamente y ganó espacios muy importantes. Hizo valer este gobierno como si fuera el primero, por la nueva Constitución y así aprovechar el articulado de la Constitución que señalaba que solo podía candidatear dos veces consecutivas.

En el tercer gobierno de Evo Morales (2015-2019), se propuso tres tareas grandes: industrializar los recursos naturales, ampliar más aun la red de conexiones terrestres de carreteras y buscar fuentes alternativas al gas para financiar al Estado, pensando en el litio, el acero y la electricidad. En la industrialización ya había avanzado con dos plantas de licuefacción de gas en Santa Cruz y Yacuiba, que empezaron el 2017 a funcionar al 20 y 25% de su capacidad instalada respectivamente, pero que ya comenzó a faltar gas; instaló una fábrica de urea en el Chapare, que la hicieron empresas chinas, de mala calidad, altamente contaminante, que vendió productos como precursor a cocaceros ligados al narcotráfico en la zona y que funcionó un mes sí y otro no, por la mala calidad tecnológica; el litio nunca pudo consolidarse, nunca se pudo cerrar acuerdo ni con rusos, chinos, ingleses o chilenos. Lo mismo paso con el hierro del Mutún para producir acero en siderurgia, capitales hindúes intentaron invertir, pero quisieron aprovechar para que se les conceda una extensión de bosque tan grande, que era una un ejemplo de deforestación mundial, lo que provocó la huida de estos capitalistas. En realidad, se puede decir que la industrialización de los recursos naturales en el gobierno de Evo Morales es cuando más avanzó, pero aun así fue un desastre. En cuanto a la inversión en carreteras, evidentemente el gobierno de Morales, en realidad desde el segundo, es cuando más kilómetros de carretera se construyeron en la historia de Bolivia. Todo basado en contratos de invitación directa y con mucha corrupción de por medio. La sustitución del gas por electricidad fracaso, porque los proyectos de El Bala y el Chepete, mostraban que los mismos no eran viables económicamente (se producía a \$us 5 el MW/H mientras el Brasil, potencial comprador, lo compraba a \$us 4 MW/H e incluso a \$us 3 MW/H si era eólica o energía limpia). La inversión en proyectos de energía limpia eólica, solar o vaporífica, fueron ínfimas. En cuanto al Litio, nunca se cerraron contratos. La empresa nacional no tiene ni capital ni tecnología para competir mundialmente y entrar al negocio de las pilas y otros conectores para energía eléctrica, por lo que se quedó en proyecto. Morales tuvo dos reveses importantes en política en este gobierno. Perdió el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que pretendía que se le autorice un tercer proceso de candidatura, cambiando el artículo de la Constitución que lo impedía. Luego logrará que el Tribunal Constitucional Plurinacional lo autorice, arguyendo que era su derecho humano (acaba de pronunciarse la CIDH que no es un derecho humano, burlar las Constituciones en este tema). Pero luego perderá elecciones subnacionales en las ciudades más importantes de Bolivia: La Paz, El Alto y Santa Cruz. Todo ello era la base del escenario de su salida.

La renuncia de Evo Morales y el fin de un ciclo político

Una candidatura forzada, una elección anulada, la renuncia de Evo Morales causada por protestas sociales y pedidos de las Fuerzas Armadas, violencia con decenas de muertos y heridos, y un

Gobierno transitorio acosado por una crisis múltiple, son los factores que anteceden a los comicios del 18 de octubre de 2020 en Bolivia.

La siguiente cronología repasa algunos hitos del conflicto boliviano, desde el referendo que negó a Morales la reelección para un cuarto mandato hasta la decisión de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de retirar su candidatura, tras la caída de su popularidad en las encuestas.

2016, año del controversial referendo de Morales

El 21 de febrero sería una fecha clave para el futuro político del país. El 51,3 % de los votantes en un referendo rechaza la propuesta de Evo Morales de modificar la Constitución para que se le permita buscar un cuarto mandato consecutivo en el período 2020-2025.

Este evento supondría la primera gran derrota para el mandatario boliviano, luego de años de victorias prácticamente constantes.

A finales de noviembre, al margen de lo que dicta la Carta Magna y del referendo de 2016, el Tribunal Constitucional habilita la postulación de Evo Morales para buscar el cuarto período en los comicios del 2019.

El 4 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral, conformado mayoritariamente por afines a Evo Morales, confirma su habilitación como candidato para la reelección. El presidente podrá volver a presentarse para revalidar su cargo.

En primer plano aparece el candidato presidencial por el MAS de Evo Morales a las elecciones de este 18 de octubre, Luis Arce. De fondo aparece la silueta del expresidente Morales. El 17 de febrero de 2020 en Buenos Aires, Argentina.

El 28 de enero de 2019, en unas inéditas primarias, Evo Morales y otros ocho candidatos opositores confirman sus candidaturas. La oposición denuncia que las primarias sólo sirvieron para darle legitimidad a la candidatura del mandatario.

Unos meses después, el 20 de octubre de 2019, la jornada de elecciones concluye con el escándalo de la interrupción del cómputo y las denuncias opositoras de que se cambió la tendencia del voto para favorecer a Evo Morales e impedir una segunda vuelta ante el candidato opositor y expresidente Carlos Mesa. Sobre los números, Morales consigue revalidar el cargo.

El 1 de noviembre de 2019, en medio de una ola de protestas sociales y huelgas en las ciudades que denuncian fraude, el Tribunal Supremo Electoral avala la victoria de Evo Morales en primera vuelta.

Diez días después la Organización de Estados Americanos (OEA) publica un informe preliminar que señala irregularidades “muy graves” en el cómputo. Horas más tarde, Evo Morales renuncia al poder tras 21 días de protestas sociales urbanas, que pasaron a la historia como la “revolución de las pititas”, agravadas por un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas de que deje el cargo. Morales gobernó Bolivia por 13 años, 9 meses y 18 días

El 12 de noviembre de 2019, en una sesión accidentada del Parlamento y sin quórum, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se proclama presidenta transitoria tras una seguidilla de

renuncias a la sucesión constitucional. El Tribunal Constitucional respalda la transición. Evo Morales arriba a México para pedir asilo. El mandatario saliente denuncia “un golpe de Estado”.

Durante 24 de noviembre de 2019, la presidenta Áñez firma una ley de convocatoria a nuevas elecciones que en principio fueron fijadas para el 3 de mayo.

Entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre de 2019 un total de 32 personas pierden la vida en enfrentamientos violentos y en protestas antigubernamentales. Muchas vidas se perdieron durante la represión de las fuerzas de seguridad.

El 10 de diciembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) califica de masacres las muertes ocurridas en el barrio alteño de Senkata y en la localidad de Sacaba durante operativos militares. Entre las víctimas, hay seguidores del expresidente Morales.

Manifestantes marchan en una protesta contra el aplazamiento de las elecciones generales, este lunes 10 de agosto de 2020 en Cochabamba, Bolivia.

Manifestantes marchan en una protesta contra el aplazamiento de las elecciones generales, el lunes 10 de agosto de 2020 en Cochabamba, Bolivia.

2020, el año del polémico Gobierno de Áñez

Pese a haber dicho varias veces que no sería candidata, el 24 de enero de 2020, la presidenta transitoria Jeanine Áñez anuncia su postulación como un intento de unir a las fuerzas contrarias a Evo Morales.

Ocho candidatos se inscriben para participar en los nuevos comicios el 3 de febrero de 2020. Entre ellos, están el exministro de Economía Luis Arce, por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales; el expresidente Carlos Mesa, y la presidenta interina Áñez.

El 21 de marzo de 2020, el virus tomaría protagonismo en la crisis política. El nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuncia que debido a la cuarentena por la pandemia los comicios se aplazan hasta el 6 de septiembre de 2020.

Unos meses después, el 23 de julio de 2020 concretamente, el TSE anuncia una nueva postergación de los comicios hasta el 18 de octubre de 2020, para cuando se espera que Bolivia esté lejos del pico de la pandemia. Una eventual segunda vuelta se celebraría el 29 de noviembre.

A partir del 1 de agosto de 2020, la Central Obrera Boliviana y varios sectores sociales y campesinos afines al expresidente Morales comienzan movilizaciones y bloqueos de carreteras para pedir que las elecciones no se posterguen.

El 13 de agosto de 2020, ante las presiones, la presidenta Áñez promulga una ley ratificando que las elecciones se celebrarán el 18 de octubre, después de que el Parlamento, controlado por el partido de Morales, aceptara la fecha. Además, el Gobierno denuncia que por culpa de los bloqueos en plena pandemia murieron 40 personas por falta de oxígeno medicinal porque los camiones distribuidores del insumo quedaron bloqueados.

El 7 de septiembre de 2020, la Sala Constitucional Segunda de la Corte de La Paz ratifica que Evo Morales, quien está refugiado en Argentina, no puede ser candidato a primer senador por la región de Cochabamba.

El último de los eventos se produce el 17 de septiembre de 2020, cuando la presidenta Áñez declina su candidatura, tras la pérdida de apoyo en unas encuestas. Áñez dijo que su decisión era para “cuidar la democracia” y ante el riesgo de que por la “división del voto democrático” el MAS gane la elección.

Un año después de su caída, el MAS vuelve a ser el partido hegemónico de la política boliviana. Es el único realmente estructurado, con una militancia y un voto fidelizado, que resiste incluso la salida del escenario político de su máximo líder y fundador: Evo Morales.

La elección general de 2020 es la primera elección sin Evo Morales desde 1997 y es la primera votación que cumple con el referendo del 21 de febrero de 2016, que le dijo a Morales que no podía aspirar a una nueva reelección. Durante toda la campaña se había hablado del siguiente quinquenio presidencial como un ejercicio de transición antes de llegar al posmasismo, pero las urnas decidieron contradecir a los pronosticadores de la política y dictaron sentencia: no era el proyecto del MAS el que estaba agotado, sino el mando único, la repetición sin fin de la figura de Morales como presidente.

Luis Arce Catacora concluirá primero cuando se termine de contar los votos y habrá logrado entre seis y diez puntos más que Morales en las elecciones fallidas de 2019. Para eso necesitó algunas herramientas que lo llevaron a un triunfo con una ventaja insospechada.

La primera fue la estrategia correcta. Mientras que Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y otras fuerzas menores apostaron al clivaje MAS/anti-MAS (todos se presentaban como la mejor opción para que el anterior partido de gobierno jamás volviera), el MAS puso el acento en la crisis económica y la estabilidad como ejes de discurso y apostó a consolidar su voto duro como objetivo público número uno. El MAS desarrolló una campaña en los márgenes de las ciudades, con caminatas y concentraciones pequeñas, mezclando reuniones sindicales con conferencias académicas para alejarse de la imagen que predominó en la última campaña de Morales.

Arce y sus estrategias apostaron por los barrios alejados, por los pobres y los empobrecidos del coronavirus; por quienes pasaron de la pobreza a la clase media durante los 14 años de gobierno de Morales y volvieron a caer en la pobreza por el coronavirus; por la nostalgia que el agravamiento de la crisis (a principios de mayo, 3,2 millones de bolivianos no tenían lo suficiente para comprar alimentos, por culpa de la pandemia y la cuarentena) creó de los años de bonanza del MAS. Por las ciudades intermedias, que son las que acogen la migración del campo, de quienes escapan de la pobreza en el campo, y que siguen siendo pobres en El Alto, Quillacollo o Montero.

Para eso tuvo aliados involuntarios, ambos llegados desde el Oriente boliviano, las regiones del país que siempre se le resistieron a Morales. La primera «ayuda» fue la del gobierno de transición. El gobierno de Jeanine Áñez era leído como la continuación de la llamada «revolución de las pititas», la revuelta ciudadana que precedió al motín policial y la «sugerencia» de renuncia de la Fuerzas Armadas a Evo Morales. La presidenta, surfeando sobre los 100 días de luna de miel, se

animó a lanzar su candidatura en enero pasado para unas elecciones que debían ser en mayo, y con ello destruyó las bases de su gobierno: un pacto no escrito entre todas las figuras del antievismo para asegurar una transición que finalizara con un partido distinto del MAS en el poder, y la colaboración de los dos tercios de diputados y senadores del MAS en la Asamblea Legislativa, que entendían que colaborando con Áñez llegarían antes a unas elecciones que los devolverían al poder.

Con el inicio de la campaña, cayó el coronavirus. Al tiempo que familiares y ministros de Áñez comenzaban a disfrutar de las ventajas del poder (aviones, fiestas), sus aliados de retiraban dejando un reguero de hechos de corrupción que destruyeron uno de los primeros mitos fundacionales del antievismo: ellos eran capaces de cometer los mismos actos de corrupción y abuso de poder que el MAS. El tiro de gracia a la popularidad de Áñez llegó en plena cuarentena: se compraron más de 100 respiradores de origen español que no solo se pagaron cuatro veces más de su precio de lista, sino que no servían para terapia intensiva. Así, los reemplazantes de los supuestos corruptos y fraudulentos no solo eran corruptos, sino también altamente ineficientes. En pocos meses, y en medio de la pandemia, cayó un ministro de Salud tras otro.

Pero hubo una «ayuda» más. De las calles surgió un liderazgo potente y que prometía victoria: Luis Fernando Camacho, el hombre que había liderado la «revolución de las pititas» e incluso había forzado a Morales a abandonar Bolivia (tras la renuncia del presidente, él mismo anunció que estaban buscándolo para arrestarlo, lo cual precipitó la evacuación hacia México), se postuló para presidente aprovechando su gran popularidad en Santa Cruz.

El MAS y Arce aún eran hegemónicos en La Paz y Cochabamba, pero necesitaban que la renuente Santa Cruz, la segunda región con mayor cantidad de votantes de Bolivia e históricamente antimasista, no se inclinara por Mesa, el candidato que más cerca estaba de Arce. En 2019 se había dado un escenario parecido. Morales lideraba las encuestas y Santa Cruz estaba controlada por Óscar Ortiz, candidato local que aspiraba a ser presidente, pero en la última semana la estrategia de «voto útil» de Mesa le dio 47% de los votos cruceños y lo acercó lo suficiente a Morales como para discutir si había ganado en primera vuelta o no.

Esta vez, Camacho no sufrió el mismo efecto de desgaste. Surgido de las calles, religioso y con un discurso que exuda testosterona, tiene una impronta más emocional que propositiva y se planteó a sí mismo como el garante de que Morales no volvería al país. Pero esa no fue la clave para que se impusiera ante la estrategia del voto útil de Mesa, sino que logró exacerbar el orgullo identitario del cruceño y convertirlo en voto. A diferencia de Ortiz, Camacho no trató de «nacionalizarse» para conquistar votos, sino que apostó por convertir al resto de los bolivianos en cruceños. Eso, sumado a la juventud del votante cruceño, convirtieron a Camacho en una fuerza local e irreductible que cerró el territorio de Santa Cruz a Mesa y polarizó el voto con Arce, lo que le permitió a este una victoria más holgada.

Eso sí, nadie se esperaba que Arce, que no es caudillo sino tecnócrata, superara el 50% de los votos. Para ello tuvo que hacer algunas jugadas finales, que lo acercan *a priori* a ser el primer presidente del posevismo antes que la continuidad de Morales. Lo primero fue tener la capacidad de criticar la gestión de Morales y cuestionar el entorno con el que gobernó el «primer presidente indígena». Arce ha prometido un gobierno de jóvenes, de nuevas figuras. Lo segundo fue alejar del

votante boliviano esa idea de que el MAS viene a eternizarse en el poder. Arce ha prometido gobernar solo cinco años y «reencaminar el proceso de cambio». Y la tercera promesa fue desterrar la idea de que con el MAS volverían las persecuciones políticas y el revanchismo. Arce ha prometido también que no perseguirá a policías ni a militares involucrados en la renuncia de Morales.

Así, el tecnócrata logró resetear el proceso de cambio y podrá gobernar con mayoría absoluta en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para saber si de verdad el MAS entró en la era posevista, habrá que ver cuál será el rol de Morales cuando regrese a Bolivia. De ello no solo dependerá la autoridad que podrá ejercer Arce sobre su bancada y sobre el país, sino también su estabilidad política. Para ganar, para cerrar el territorio cruceño a Mesa, el MAS hizo crecer a golpes a Camacho. Ahora, con todo el poder territorial conseguido en el Oriente, este será el único opositor con capacidad de movilización con el que tendrán que lidiar.

Según los conteos oficiales, el MAS obtuvo una contundente victoria en primera vuelta con 55% de los votos. ¿Por qué el desempeño electoral del MAS fue tan exitoso, excediendo las expectativas, incluso de los más optimistas? Por tres razones principales.

Primero, por la emergencia de un «voto de resistencia» de sectores urbano-populares y campesinos. Estos sectores fueron objeto de varias violencias en los últimos meses: a) la violencia electoral: su voto por el MAS en 2019 fue escamoteado a raíz de una falsa denuncia de fraude avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA); b) la violencia simbólica: hubo constantes descalificaciones desde el Estado y en las redes sociales pobladas por sectores conservadores de clases medias, se difundió la imagen de «hordas de violentos e ignorantes» en referencia a estos sectores populares, y en noviembre de 2019 algunos policías quemaron la wiphala (bandera indígena reconocida constitucionalmente); c) la violencia militar-policial, concretada principalmente en las masacres de Sacaba (en los valles) y de Senkata (en el Altiplano); d) la violencia económica: las medidas de cuarentena frente al covid-19 fueron tomadas en desmedro del sector informal de la economía.

Segundo, por la rearticulación de las organizaciones sindicales y campesinas. En los últimos años estas organizaciones resultaron debilitadas por su propia relación clientelar con el gobierno de Evo Morales. Después de la renuncia del presidente en noviembre de 2019, estas organizaciones lograron rearticularse rápidamente, en un tejido social vigoroso, que mostró su musculatura paralizándolo a principios de agosto de este año para impedir el prorroguismo del gobierno de transición. Este tejido organizacional fue la base de un renovado apoyo electoral al MAS.

Tercero, por la propia debilidad política y electoral de los competidores de derecha del MAS, fragmentados y enfrentados entre sí. El candidato de centroderecha Carlos Mesa no logró articular un proyecto de país ni un discurso electoral capaz de seducir a los indecisos del Occidente boliviano. El candidato de la derecha empresarial, Fernando Camacho, tampoco logró convencer a los indecisos del Oriente del país. Hasta una semana antes de las elecciones, en el bastión electoral de Camacho, en el departamento de Santa Cruz, había 28% de indecisos, que representan 7,5% del padrón electoral total. Son personas de sectores pobres que fueron excluidos por los empresarios a los que representa el líder cruceño, y que fueron violentadas en las movilizaciones que lideró este empresario contra Evo Morales hace un año. En la elección del

18 de octubre, estos indecisos de tierras bajas optaron por el MAS, en rechazo a una elite empresarial incapaz de incluirlos en su «modelo de desarrollo». Por eso el MAS obtuvo 35% de los votos en esa región.

Arce y sus ofertas: vacunas y reactivación económica

El siguiente gobierno del MAS, con Arce a la cabeza, estará signado por la crisis económica, el conflicto social y la emergencia sanitaria por el covid-19. El apoyo de 55% del electorado no significa una sólida base social necesariamente. El MAS no logrará controlar los dos tercios de la Asamblea Legislativa como lo hizo en los últimos años. La coyuntura política requiere de una cultura democrática de construcción de acuerdos con otros actores políticos. Y tal cultura es muy débil, casi inexistente, en un MAS acostumbrado a un tipo de hegemonía política que ya no existe en Bolivia.

Las dos ofertas electorales de Arce más importantes fueron: vacunas y reactivación económica. Esta última vendiendo una imagen de tecnócrata, contraria a lo que siempre ofreció el MAS. Arce tuvo que superar dos hechos previamente: primero Evo Morales intentó ser candidato, ya no a la presidencia, pero sí como senador. El Tribunal Electoral Plurinacional, que no cumplió con quitar al MAS su personalidad jurídica, por haber hecho fraude, que no avaló el TEP, esta vez sí cumplió con negar a Morales esta posibilidad. La segunda, Arce, tuvo que aceptar que David Choquehuanca, del ala más indigenista del MAS se imponga al menos como candidato a la Vicepresidencia. Eso, hasta hoy le pesa a Arce, ya que Choquehuanca donde va habla como si fuera un gobierno paralelo. De hecho, está formando estructuras paralelas al MAS en todo el país, a la fecha.

Arce ofertó vacunas y si bien captó importantes cantidades de vacunas Sputnik V de Rusia, gracias a las relaciones con Putin, aun así, no logró grandes avances en la vacunación misma. Bolivia según Arce tenía a un 70% de la población vacunada a marzo de 2022. Lo que no decía Arce y los dijo la OMS/OPS es que si se contaban las 3 vacunas que debía tener la población a esa fecha, Bolivia era el último país de Latinoamérica con un índice de solo 29% de población vacunada. El índice de contagios, por tanto, era también uno de los más elevados del continente.

En cuanto a la reactivación económica, Arce tuvo que aceptar una negociación previa que hizo Añez, para conseguir recursos del FMI por \$us 200 millones. Monto que era muy pequeño. Arce recibió el país con indicadores económicos muy malos. El 2020 Bolivia cayó en 11% su economía, las reservas RIN cayeron de \$us 17.000 millones el 2017 a \$us 11.000 millones el 2019, y a \$us 10.000 y a \$us 7.000 el 2020. Arce las hizo bajar aún más a \$us 4.000 y hoy esta tratando de monetizar el oro del Banco Central para mantener este nivel mínimo que permite mantener el tipo de cambio inmodificado por más de 12 años. La inflación se ha calculado este en 0,24%, lo que ya es en realidad una deflación, indicador menos que positivo para el propósito de reactivación económica. Los depósitos bancarios el 2020 crecieron un 1% y los créditos crecieron un 1%. No hay visos de incremento de la actividad económica formal. La informal es posible que haya crecido. Solo así se explica que el INE señale que Bolivia tuvo un 5% de crecimiento el 2021, efecto rebote según la oposición y economistas independientes. En todo caso, reactivación como tal a julio de 2022, no existe. El único indicador que está blandiendo Arce, es el que en 6 meses el 2022, las exportaciones fueron de \$us 4.500 millones. Pero eso en una economía de \$us 40.000 millones es apenas un 10%.

A ello se suma, que la justicia está totalmente desprestigiada después de varios escándalos de corrupción, tanto en sentencias, como en protecciones al narcotráfico. Los jueces en Bolivia son electos, y eso se maneja políticamente en las postulaciones en el parlamento donde el MAS tiene mayoría. O sea, que un fracaso de la justicia es un fracaso del partido gobernante. A eso se suma, que el caballito de batalla contra la oposición se ha vuelto el juico a Jeanine Añez, a quien se la mantuvo en prisión preventiva por más de 1 año, pese a las dolencias y decaimiento de su salud en prisión y a pedidos de organismo de DDHH de que se la libere. En dos juicios denominados Golpe de Estado I y II se busca inculparla junto a comandantes de las FFAA y policiales además de dirigentes sociales. En el segundo, donde se señalaba que asumió funciones presidenciales inconstitucionalmente, ha sido sentenciada a 10 años de cárcel. En el segundo donde se trata de probar que hubo Golpe de Estado, hay declaraciones de las ex presidentas de Senadores y Diputados del MAS, que señalan que la presidencia de Añez fue fruto de una negociación política, en la que desde México en su exilio, participó Evo Morales, junto a representantes del MAS, Iglesia católica, NNUU y UE. Esto solamente ya es suficiente para desvirtuar esta versión de Golpe de Estado del cambio de gobierno.

2.4. Chile

Chile después de Pinochet vivió una seguidilla de gobiernos de la alianza entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Tenían una cómoda mayoría parlamentaria, hasta la elección en que apreció la figura de Piñera.

Varios gobiernos de una alianza híbrida de la social democracia con la democracia cristiana, que ha dado como presidentes a varios personajes que eran del *stablishment* político. Primero Patricio Aylwin de la DC el 1990; Eduardo Frei de la DC el 1994; Ricardo Lagos del PS el 2000; Michelle Bachelet de PS el 2006. Aquí se produce una interrupción de este *pasanaku* presidencial, ya que gana las elecciones la derecha conservadora con Sebastián Piñera el 2010; pero retomará este esquema de DC-PS otra vez con Bachelet el 2014. Nuevamente gana el 2018 Piñera y el gran cambio viene el 2022 con Gabriel Boric, de una alianza de varias organizaciones de izquierda especialmente juveniles e indígenas, incluido el PCCH.

Piñera o el retorno de la derecha al poder, esta vez democrática

El nombre de Sebastián Piñera fue seleccionado por la directiva de Renovación Nacional como el de su candidato para las elecciones presidenciales de 2009 días, después de que este fuera derrotado en la segunda vuelta de la elección de 2005-2006. Piñera declaró que deseaba continuar en el servicio público, pues se sentía comprometido con quienes habían votado por él, aunque no sabía en qué cargo. Sin embargo, la mesa directiva de su partido estimó que era prudente que se mantuviese en segundo plano. Desde abril de 2007 comenzó a aparecer su nombre en encuestas de intención de voto para la siguiente elección presidencial, hechas por diversos medios, apareciendo como ganador en la mayoría de éstas (véase anexo con las encuestas).

En mayo de 2009 el senador Fernando Flores, exintegrante del PPD y fundador de Chile Primero se unió a la campaña de Piñera, formando la llamada Coalición por el Cambio.¹⁶⁵ Tal apoyo fue valorado por Piñera, pero no por algunos militantes de Chile Primero, que dejaron el movimiento y se unieron a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Flores declaró que su apoyo se debe a que "Chile necesita un cambio y ese cambio no lo puede dar la Concertación", y que "a la

candidatura de Piñera le hacía falta una fuerza progresista", aunque dejó claro que "si no me gusta la Coalición por el Cambio, en tres meses más me salgo".

Tras el dictamen de la Contraloría de junio de 2009, que prohibió la entrega gratuita de la pastilla del día después en los municipios, Piñera se declaró a favor de apoyar en su posible futuro gobierno "una ley para permitir la distribución del medicamento", y que esa postura era compartida por muchos de los parlamentarios de la Alianza. Marco Antonio Núñez, diputado PPD y presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja, declaró que tal postura era "oportunista", y que fueron 36 parlamentarios de la Alianza quienes solicitaron la prohibición del medicamento. El Gobierno, en respuesta al dictamen de Contraloría, pidió una reconsideración, e informó que enviaría un proyecto de ley para garantizar el derecho a la anticoncepción, para el cual Piñera dio "libertad de acción" a los parlamentarios de la Alianza en su votación, pidiéndoles que "actúen de acuerdo a su propia conciencia y su propia libertad".

Aunque formó los denominados "grupos Tantauco" para que lo apoyen en la realización de su programa, Piñera no era un hombre de trabajo en equipo.

Pocos días antes de la segunda vuelta de la elección señaló que "lo más probable" era que, de ganar las elecciones, en su Gobierno no hubiera nadie que haya sido ministro del Gobierno Militar, porque su Gobierno sería uno "mirando al futuro y que le abrirá las puertas a una nueva generación". Sin embargo, al día siguiente retiró sus dichos, luego de que Rodrigo Hinzpeter (su jefe de campaña) lo contradijera, señalando que a nadie se le iba a reprochar haber sido ministro de Augusto Pinochet. Las declaraciones habían generado rápidamente fuertes fricciones dentro de la Coalición por el Cambio, entre los sectores pinochetistas y los más lejanos a la figura del dictador, por lo que Piñera se vio obligado a cambiar sus dichos, argumentando que "no es un pecado" haber trabajado en la dictadura militar de Pinochet.

El 17 de enero de 2010 en la segunda vuelta electoral de la elección presidencial, Piñera fue elegido presidente con un 51,61 % de los votos válidamente emitidos, superando a Eduardo Frei que obtuvo un 48,38 %, poniendo fin a 20 de años de gobiernos de la Concertación.

Piñera anunció el que sería su primer gabinete ministerial el 9 de febrero de 2010, en el Museo Histórico Nacional de Chile, el cual estaba compuesto de 16 hombres y 6 mujeres, siendo 4 militantes de RN, 4 de la UDI y 14 independientes.¹⁸⁹

El 12 de febrero de 2010 manifestó el respaldo de su administración al socialista José Miguel Insulza en su repostulación al cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).¹⁹⁰

Durante la campaña presidencial Piñera propuso una privatización parcial de la minera estatal Codelco, conservando el 80 % de su propiedad en manos del Estado y vendiendo el 20 % restante.¹⁹¹ Sin embargo, antes del inicio del nuevo gobierno, Laurence Golborne, quien asumiría como ministro de Minería de Piñera, dijo que Codelco continuaría siendo estatal, y que no estaba en el programa de gobierno la inclusión de capitales privados a la empresa.¹⁹²

A pocas semanas del inicio de su gobierno, el 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8,8 MW azotó al centro sur del país,¹⁹³ el cual produjo, además, un fuerte tsunami que impactó las costas chilenas.¹⁹⁴

La ceremonia de cambio de mando, realizada al mediodía del día 11 de marzo de 2010, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, a las 12 horas. Aunque fue la ceremonia de cambio de mando más austera (debido al recién pasado terremoto que afectó al país), contó con la presencia de múltiples delegaciones internacionales. La ceremonia estuvo marcada por un nuevo terremoto de 6,9 grados que tuvo lugar a la 11:39 (UTC-3) y sus sucesivas réplicas.

Desde su salida del poder el 11 de marzo de 2014, Piñera se ha dedicado a la conformación de la Fundación Avanza Chile,¹⁹⁹ un *think tank* de centro derecha que busca jugar un rol importante en la oposición al gobierno de Michelle Bachelet.²⁰⁰ Además de Piñera, integran el directorio de la fundación varios de sus exministros.²⁰¹ Al mismo tiempo, ha participado de conferencias y seminarios.¹⁹⁹

En mayo de 2014 fue invitado a conformar el Club de Madrid.²⁰²

Bachelet recupera el gobierno para la coalición

Michelle Bachelet inició su segundo gobierno alentada por los índices de popularidad más altos con los que se había despedido nunca un presidente en Chile tras su primer mandato. Un 84% de los chilenos la apoyaban entonces y un 62% lo refrendaron con su voto en las urnas. Eso le dio alas para plantear y emprender algunas de las reformas más profundas y ambiciosas que había visto la sociedad chilena desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Pero a medida que se desarrolló su gobierno, las cifras de aprobación fueron cayendo a la vez que lo hizo el alcance de sus reformas.

La política pública que más importancia tuvo, sin duda, fue la reforma educacional, que será el principal caballo de batalla y la bandera por la que será recordada Bachelet, especialmente para las casi 260.000 familias más vulnerables a las que se estima alcance el 60% de la gratuidad universitaria implantada por su gobierno. Además, la reforma supuso un cambio profundo de las escuelas, de las escuelas públicas y de las que tienen un financiamiento mixto público-privado, porque ya no se va a poder seleccionar a los estudiantes, no se va a poder lucrar en la educación y esos son cambios muy profundos. Esta reforma quedará un poco rezagada si se aplica la nueva Constitución con Boric, que declara la gratuidad total de la educación universitaria.

Dentro del mismo ámbito de los temas valóricos, muchos destacan también los avances en la agenda social, especialmente la aprobación del aborto en tres causales (violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad fetal), uno de los mayores logros de la presidenta, o el acuerdo de unión civil que regula la unión de parejas homosexuales y heterosexuales equiparando sus derechos ante la ley. Otro de los temas donde la nueva Constitución también va más adelante.

En política, la reforma más profunda sería el fin del sistema electoral binominal, heredado de la dictadura. Era un sistema diseñado por Pinochet para que la derecha, siendo minoría, siempre consiguiese empatar en el Congreso.

La corrupción fue uno de los flagelos de la presidenta, pero Bachelet fue hábil en tomar ese problema y convertirlo en una oportunidad, aprobando una amplia agenda de probidad (transparencia). Hubo muchísimos cambios en las campañas electorales, en cómo se regula el uso del dinero en la política, en cómo se regulan las donaciones políticas, se le dio autonomía al Servel, el servicio electoral, se cambió la ley de partidos políticos para transparentar los padrones

internos, los partidos tuvieron que refichar a todos sus militantes, y eso fue un remecimiento muy importante en el tema de la probidad y la transparencia de la política, del país.

Menos visible quizá fueron los avances medioambientales donde Chile pasó de ser un país donde era norma importar energía a exportar a países vecinos, como Argentina.

Las energías renovables pasaron de constituir un 5% al 20% de la matriz energética en un período de cuatro años. La generación solar tuvo un lugar destacado, multiplicando por 200 veces la capacidad instalada en centrales solares. En marzo de 2014, había 11 MW instalados y hoy existen 2.100 MW. De cinco plantas solares en operación, hoy Chile cuenta con 81.

En los aspectos más negativos estuvo el bajo rendimiento de la economía que marcó algunos índices más bajos de las últimas décadas (1,6%), influenciada sin duda por el descenso del precio del cobre, del que Chile es el primer exportador mundial, y que registró durante el gobierno de Bachelet bajos mínimos históricos. Aunque para muchos, hubo más.

Y sin duda el escándalo que afectó al propio hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos. Ella era un fenómeno porque la gente común y corriente que pensaba que era distinta a los políticos tradicionales, después del caso que afectó a su hijo, que fue involucrado en ciertos casos de corrupción, la gente empezó a verla como una política más y eso evidentemente afectó el éxito de su gobierno.

Esto supuso para Bachelet niveles de desaprobación que eran inimaginables para una figura que parecía absolutamente intocable, la popularidad de Bachelet llegó a terminar en cifras tropicales en su primer mandato.

Otra de las críticas es la cantidad de reformas que no llegó a consolidar y quedaron a medias. Su programa de gobierno fue realmente ambicioso, planteó una reforma tributaria, educacional, una reforma constitucional, laboral y una reforma provisional (de pensiones), o sea todas las reformas más complejas que puede plantear un gobierno como desafío.

Sin embargo, la reforma tributaria fue un fracaso, porque no logró recaudar lo que pretendía recaudar no le alcanzó para financiar la gratuidad en la educación y además hubo de ser modificada. Mientras en la reforma laboral el balance no es muy positivo, se trató de mejorar esta inequidad entre el trabajador y el empresario, sin embargo, ninguno de los actores quedaron conformes; en el caso de la reforma de las pensiones o la constitucional, los avances fueron nulos. Es un fracaso mandar un proyecto de reforma constitucional a cinco días de terminar el gobierno, con críticas de parlamentarios de su misma coalición.

Para muchos este ha sido el gobierno quizá más reformista que ha tenido Chile desde el regreso de la democracia.

Piñera vuelve al gobierno, con menos impulso

El segundo gobierno de Sebastián Piñera se inició el 11 de marzo de 2018 concluyendo el mismo día de 2022, fecha en que asumió su sucesor.

En octubre de 2019 se inició una serie de protestas en respuesta a las alzas del sistema público de transporte, que entraron en vigor el 6 del mismo mes. Durante este evento, conocido como estallido social, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de «evasión masiva» en el Metro de Santiago. Con el paso de los días, el número de evasores aumentó y se registraron incidentes dentro de las estaciones del ferrocarril subterráneo.

Las protestas rápidamente se transformaron en manifestaciones de demandas sociales más generales, incluyendo deficiencias en el sistema de pensiones, educación, salud, privatización de las aguas, corrupción, represión policial, entre otros. Tanto por el nivel de daño en la infraestructura pública, el número de manifestantes, las medidas adoptadas por el gobierno y violaciones a los derechos humanos cometidos principalmente por Carabineros de Chile, estas protestas han sido catalogadas como el «peor malestar civil» ocurrido en Chile desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Las principales controversias fueron:

- Banco de Talca

El hecho ocurrió el 23 de agosto de 1992 cuando Ricardo Claro transmitió en vivo, durante un programa político del canal de televisión de su propiedad, Megavisión, una conversación telefónica grabada clandestinamente por agentes de inteligencia del ejército. En ella Piñera daba instrucciones para que Evelyn Matthei, su correligionaria en aquel momento, fuera dejada en contradicción y como poco preparada en una entrevista televisiva, para acabar con sus aspiraciones presidenciales. La aparición de la grabación fue interpretada por Andrés Allamand como una maniobra del Ejército para terminar con la derecha liberal, que crecía exitosamente en aquel momento. Tras la polémica posterior ambos declinaron sus candidaturas. Dentro del mismo caso un hijo suyo fue secuestrado por algunas horas, hecho ocurrido en 1993, y que Piñera reconoció en 2003. El secuestro habría ocurrido para obligarlo a dejar de investigar sobre el espionaje telefónico del que fue víctima el año anterior.

- Caso Chispas: «el negocio del siglo»

En 1997 se produjo un escándalo bursátil y político que tuvo como protagonistas a la empresa española de energía Endesa, a la empresa chilena Enersis, que entonces fue comprada por la primera, y a los empresarios y políticos José Yuraszeck (UDI), miembro del directorio de Enersis, y Sebastián Piñera (RN), importante accionista de la misma, por entonces senador. Yuraszeck y sus exsocios vendieron los títulos de Enersis a Endesa por un monto sobrevalorado, en lo que también se conoció como «El negocio del siglo», que perjudicaba enormemente a los demás accionistas, entre ellos, a Piñera. Sin embargo, este último utilizó su calidad de senador para obtener por sus acciones más beneficios que los demás accionistas.

Por este fraude, Yuraszeck y sus socios fueron multados solo por 75 millones de dólares, siendo que sus ganancias obtenidas por el negocio ascendieron a los 400 millones.

- Parque Tantauco

A fines de 2004, Piñera compró en cerca de 6 millones de dólares unas 115 000 hectáreas de bosque nativo en la isla Grande de Chiloé, que corresponden al 15% de su superficie,²¹² para

construir el actual Parque Tantauco. El proyecto contempló desde un inicio la construcción de un parque abierto al público que incluyera la realización de excursiones, deportes y la observación de la naturaleza, que pudiera recibir unos 100 000 visitantes anuales.²¹³ Durante 2006 y 2007 se implementaron lugares para recibir a los visitantes, además de que se construyeron senderos y zonas de camping.

A pesar de que Piñera declaró que no había tenido mayores antecedentes sobre la existencia de algún conflicto dentro de los terrenos que había comprado, existía un amplio rechazo al proyecto de parte de las comunidades huilliches de la zona, lo que había sido cubierto por la prensa local. El rechazo provenía de las reclamaciones por los derechos "ancestrales y legales" que posee el pueblo huilliche sobre los territorios,²¹⁶ estando estos últimos garantizados por el Tratado de Tantauco, capitulación firmada entre España y Chile en 1826, que dejaría los territorios en cuestión bajo dominio huilliche, según dice una carta abierta entregada a Piñera por el Consejo de Caciques Huilliches. Además la carta afirma que el cambio de nombre del territorio, bautizándolo como Tantauco, es una ofensa y una provocación a su pueblo.

- Acciones de LAN

En 2006, cuatro meses antes de acabar el gobierno de Ricardo Lagos y asumir a la presidencia Michelle Bachelet, nuevamente Sebastián Piñera fue foco de polémica, esta vez en su calidad de miembro del directorio e importante accionista de la empresa de aerolíneas LAN Airlines, comprando acciones en 2006 a precios más bajos de lo normal, y en momentos extrañamente muy convenientes, lo que la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) reveló como un uso indebido de información privilegiada, no accesible a los demás compradores. Esta compra hizo que en septiembre de 2009, a meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 2009-2010, Piñera apareciera en el informe internacional de corrupción efectuado por Transparencia Internacional.

En 2018, un exjefe de operaciones de Banchile Corredora de Bolsa aseguró tener guardadas tres horas de grabaciones de la compañía con Piñera, relacionadas con el proceso de compra y regateo de acciones. Dicha persona aseguró que no revelaría las grabaciones a menos que un juez se lo exigiera. De lo que se ha sabido de los registros, en ellos también aparecen involucrados Julio Ponce Lerou y los hermanos Cueto.

- Caso Publicam

A fines de 2006 el senador Guido Girardi estuvo involucrado en un escándalo de corrupción en su rendición de gastos electorales, en la cual se le acusó de presentar boletas y facturas falsas de empresas ficticias para desviar fondos públicos, hechos que se conocieron como el «Caso Publicam». Las campañas de Sebastián Piñera (RN) y la diputada Lily Pérez (RN) también fueron parcialmente financiadas a través de facturas falsas presentadas a la «empresa fantasma» Publicam. El Servel finalmente sobreseyó el caso de Piñera y Lily Pérez, determinando que ambos desconocían el origen de dichas facturas. La condena para el caso de Girardi, por otra parte, recayó exclusivamente en su asesor electoral, Ricardo Farías, debiendo cumplir una pena remitida de 541 días, así como el pago de 21 UTM (unos 700 mil pesos de entonces). El monto total por las facturas fraudulentas ascendió a los 55 millones de pesos.

- Conflictos de intereses en cartera ministerial

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) asumieron a la cartera ministerial diversos empresarios del país, a algunos de los cuales se consideró que podrían tener conflictos de intereses con sus respectivas funciones públicas. Tales son el caso, al inicio de su mandato, de Joaquín Lavín como ministro de Educación, siendo uno de los propietarios de la Universidad del Desarrollo o Alfredo Moreno como ministro de Relaciones Exteriores, parte de los directorios de las transnacionales Walmart Chile y Falabella.

El 3 de abril de 2012, Jorge Bunster fue designado ministro de Energía en reemplazo de Rodrigo Álvarez Zenteno, produciéndose un debate debido a que siendo ya designado poseía \$273 millones de pesos en acciones en Copec y Enersis, de las cuales se deshizo antes de asumir el cargo.

- Proyecto de Minera Isla Riesco

En abril de 2011, los diputados Carolina Goic (DC), Patricio Vallespín (DC), Enrique Accorsi (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) junto a las organizaciones ambientales de Magallanes Alerta Riesco, Frente de defensa Ecológico Austral y OCDEF de Río Verde, denunciaron «presiones indebidas» y «serios conflictos de intereses» por parte de autoridades del Gobierno frente al Proyecto Minero de carbón a realizarse por la Minera Isla Riesco en Isla Riesco. Vallespín, miembro de la Comisión de Recursos Naturales, dijo que el estudio de impacto ambiental fue aprobado rápidamente (tras un año y medio de tramitación), a pesar de ser este «absolutamente insuficiente, incompleto, con metodologías inadecuadas, donde se usa información falsa», a juicio del diputado. Asimismo, añadió que las mayores presiones para su rápida aprobación habían sido lideradas por el entonces Presidente Sebastián Piñera. En noviembre de 2010, presentando el Plan Regional de Desarrollo y estando el proyecto todavía en etapa de evaluación, defendió abiertamente el proyecto, diciendo que generaría muchos empleos. Luego de este discurso los informes de evaluación ambiental dejaron de generarse y dos meses después el proyecto ya estaba aprobado.

La Minera Isla Riesco, sociedad anónima cerrada creada en 2006, se conforma por accionistas de Copec e inversores de Ultraterra Ltda. Piñera es uno de los mayores accionistas individuales de la empresa Copec, con 785 609 acciones en 2011, equivalentes a más de 9,7 millones de dólares o el 0,06 % de la empresa. Algunos de sus ministros también se verían supuestamente beneficiados de este proyecto, tales como Felipe Larraín, que en el pasado había pertenecido al directorio de una sociedad relacionada con Copec, y Laurence Golborne, quien fue hace años gerente de AES Gener, empresa asociada a cinco termoeléctricas que se verían beneficiadas por el carbón explotado en Isla Riesco, aunque no queda claro cuál sería ese supuesto beneficio. La hermana de este último, Daisy Golborne, también sería accionista de Copec.

- Empresas zombis

Una investigación publicada por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) en 2017, descubrió que diversas empresas que declararon cuantiosas pérdidas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) en realidad no estaban en crisis, sino que compraban firmas en quiebra y utilizaban sus pérdidas para borrar utilidades y así evadir impuestos. Además de Sebastián Piñera, otros

beneficiados con estas millonarias utilidades fueron miembros de la familia Cueto, los socios de Penta, sociedades de controladores de Falabella.

- Paraísos fiscales y patrimonio no declarado

En 2017, Piñera apareció en la revista Forbes con un patrimonio total de 2700 millones de dólares. Como parte de su candidatura presidencial, debió declarar su patrimonio, lo que hizo por un monto total de solo 600 millones. Entonces el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile reveló que el candidato tenía un millonario patrimonio no declarado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, donde en 2004 había creado una sociedad llamada Piñera Asociados, que dos años después se rebautizó Inversiones Odisea Limitada. Esta sociedad fue creada con solo 18 millones de Sebastián Piñera, mientras que cada uno de sus hijos, varios de ellos por entonces menores de edad, figuraba con 4495 millones de dólares. Mediante este patrimonio no declarado, Piñera realiza una evasión fiscal internacional.

- EnjoyGate

El 11 de marzo de 2021, la periodista de investigación Alejandra Matus reveló a través de su cuenta de Twitter una acusación en contra de Sebastián Piñera y miembros cercanos de su familia, por conflictos de intereses con la empresa Enjoy S.A., propietaria de varios casinos de juego de Chile. La acusación aclara que Piñera había firmado un decreto que salvaba a la empresa de la quiebra, y le permitía gozar de facultades que otros casinos no tenían en medio de las restricciones de movilidad y apertura de negocios derivadas de la pandemia de COVID-19. La acusación se hizo conocida a nivel nacional gracias a la entrevista realizada a Matus en el programa de televisión de La Red Mentiras verdaderas. En enero de 2015, el hijo del presidente, Sebastián Piñera Morel, junto a José Miguel Bulnes, a través de su empresa BP Capital, compraron el 36,8% de Inversiones Inmobiliarias Enjoy SpA, para desarrollar proyectos inmobiliarios. Durante 2017, BP Capital recaudó grandes sumas de dinero a través de bonos poco transparentes. Posteriormente, durante 2020 y en medio de la pandemia de COVID-19, se realizaron una serie de campañas de lobby que involucraban a la empresa Moneda Asset e importantes familias de empresarios, como los Piñera y los Cueto, así como Pablo Echeverría y Fernando Tisné. Todos estos hechos sirvieron como antecedentes para las investigaciones de Matus. El 21 de julio del 2021, la Contraloría General de la República descartó que haya incurrido en una ilegalidad.

Todos estos hechos, más las indecisiones en el tema de la gratuidad en la educación universitaria, que generó liderazgos ya en su primer gobierno y en el de Bachelet, como los de Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa, entre otros, los que luego se asociaron a movimientos de izquierda independiente o el propio Partido Comunista como es el caso de Vallejo. El movimiento estudiantil del 2011 fue muy rico en la generación de una camada de militantes del cambio. Piñera nunca llegó a más de ofrecer que los créditos que asumían los estudiantes para cubrir los costos de su educación universitaria, que constituye una privatización *de facto* de la educación superior de Chile, se podían cofinanciar o reducir, en los montos, más no eliminar.

Todo ello llevó a que se repitan las movilizaciones y se tenga un movimiento en las calles casi continuo y permanente, que le restó gobernabilidad. A ello se le sumaron problemas con dirigencia sindical del cobre y de otros sectores, incluido los transportistas, que fueron el

detonante de la caída de Allende. Hasta ese extremo llegó la incapacidad de Piñera de resolver conflictos.

Boric, los activistas al poder

Gabriel Boric ha asumido como nuevo presidente de Chile este 11 de marzo de 2022. Ha sido una ceremonia atravesada por la épica y llena de simbolismo: hace solo diez años, Boric era un dirigente estudiantil que se manifestaba en las calles por la educación gratuita. Hoy, con 36 años, lidera la irrupción en La Moneda de una nueva izquierda en Chile, con dirigentes nacidos en democracia y dispuestos a pasar página de la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El país sudamericano entra así en una etapa política sin precedentes en América Latina, cargada de desafíos por la magnitud de los cambios estructurales prometidos. Los chilenos esperan que Boric entierre el legado neoliberal de los años setenta y avance hacia un país más equitativo, con mayor presencia del Estado en cuestiones básicas como la salud, y promueva la defensa del medio ambiente y una agenda feminista.

Puntual al mediodía de Chile, Boric subió la escalinata del Congreso Nacional, ubicado desde 1990 en Valparaíso, a unos 110 kilómetros de la capital Santiago. Allí se siguió la tradición chilena de cambios de mando y sus históricos ritos republicanos, como el traspaso de la estrella de cinco puntas –una reliquia que lleva el nombre del libertador Bernardo O’Higgins–, considerada como el verdadero símbolo del poder en Chile y que cuelga de la banda presidencial. Boric prometió entonces “ante el pueblo y los pueblos de Chile” desempeñar fielmente el cargo de presidente. Se le vio contento y emocionado y, como se le suele observar desde que resultó electo, con traje, pero sin corbata.

En el público estaba su familia y su pareja, la que será a partir de hoy la nueva primera dama en Chile, Irina Karamanos, militante feminista del partido de Boric, Convergencia Social. En la testera se encontraba, como indica la tradición, el presidente saliente, Sebastián Piñera, y ambos intercambiaron unas breves palabras. Al salir del edificio, a la primera persona que saludó Boric fue a la recién asumida senadora Fabiola Campillai, la mujer que quedó ciega por la actuación policial en el marco del estallido social de 2019. Le siguieron los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, que ingresaron juntos al Congreso, y la que fue mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, invitada especialmente a la ceremonia por Boric. También estuvo el precandidato presidencial de Colombia Gustavo Petro, quien llegó junto con la comitiva argentina. El presidente Alberto Fernández fue el único que habló con la prensa. Fuera de protocolo, el argentino dijo que pensaba llevarse muy bien con Boric. “Pensamos igual”, explicó. Faltaron a la cita los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Venezuela, Nicolás Maduro. El rey Felipe VI, representante de España, fue uno de los últimos en la larga fila de autos oficiales que se formó frente al Congreso.

Las bandas militares recibieron a cada uno de los invitados. Pero fuera del Congreso, el ambiente era desangelado, sin público ni “vivas” para el nuevo presidente. Solo se escuchaba el canto de las gaviotas. La gente que intentó acercarse al edificio, como ha ocurrido en cada uno de los traspasos de mando en Chile, se encontraron con un vallado policial colocado a unos 300 metros del lugar.

Así fue el cierre de la ceremonia, antes de regresar a Santiago. La jornada había arrancado temprano en Cerro Castillo, la residencia presidencial de descanso en Viña del Mar, al lado de Valparaíso, donde Boric y su pareja se alojaron la noche del jueves y el viernes desayunaron con un grupo de dirigentes sociales. Fue un símbolo de la apertura del palacio a la ciudadanía, en la línea de las señales que Boric ha dado desde que resultó electo el pasado 22 de diciembre. En los jardines de esta residencia, el presidente y sus 24 ministros –14 de ellas mujeres– se sacaron la foto oficial.

La llegada de Boric a La Moneda marca varios hitos. Por primera vez, una mujer, Izkia Siches, será ministra de Interior, una cartera de primera línea que tiene a su cargo la conducción política y la seguridad pública. La nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, ocupará el ministerio de Defensa, en un gesto simbólico y político considerando el trágico golpe militar de 1973. Con el nuevo Gobierno, a su vez, regresa el Partido Comunista a la primera línea del poder político, un espacio que no ocupaba desde la Unidad Popular de Allende. Lo hará con Camila Vallejo en la vicería, uno de los cargos de mayor relevancia de La Moneda, y con la integración de dos militantes comunistas al frente de las carteras de Ciencias y Trabajo. El Ejecutivo de Boric debuta a su vez con la incorporación del mundo socialista, que no pertenece al bloque de origen que lo llevó a la presidencia, pero que ha sido incluido en esta nueva coalición que debuta este viernes, todavía sin nombre.

El nuevo Gobierno tendrá que lidiar con las grandes expectativas que ha generado –fue electo con el 55% de los votos–, y con enormes desafíos inmediatos, como una economía en declive, la crisis migratoria en el norte y episodios de violencia en la Araucanía, en el sur. Para reducir el temor de la derecha a una Administración que tendrá entre sus socios al Partido Comunista, Boric puso la economía en manos de Mario Marcel, un moderado socialista respetado por todo el espectro político. Boric convivirá además en el arranque de su mandato con una convención constituyente que deberá tener listo en julio el texto de una nueva Constitución. De ser finalmente aprobada en un referendo, representará un cambio profundo al entramado constitucional actual –que data de 1980, del régimen de Augusto Pinochet, aunque con múltiples reformas– y, por lo tanto, de todas las instituciones vigentes.

Una de las primeras decisiones del actual Gobierno, anticipada en la noche del jueves, fue retirar las 139 querrelas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas en el marco del estallido social contra personas detenidas por violencia, algunas acusadas o condenadas por delitos graves. La decisión, en línea con las promesas de campaña, provocó la crítica de la actual oposición: “Es una mala señal hacia justificar la violencia”, lamentó Jaime Bellolio, que hasta hoy era el portavoz de Piñera.

Entre las primeras acciones de Boric, estuvo la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que ha generado un proyecto de nueva Constitución Política del Estado, con varios cambios fundamentales:

- 🚩 La denominación de República Plurinacional y la Plurinacionalidad (art. 1)
- 🚩 La libre determinación (art. 5)
 - Autonomía (art. 34)
 - Autogobierno (art. 34)
 - Instituciones propias (art. 34)
- 🚩 Derecho para afro descendientes (art. 92)
- 🚩 Salud Indígena (art. 44)
- 🚩 Pluralismo jurídico (art. 308)
- 🚩 Consejo de la Justicia (art. 341)
- 🚩 Organización interna del Estado con Regiones Autónomas (art. 218)
- 🚩 La Asamblea regional (art. 224)
- 🚩 Comuna Autónoma (art. 200)
- 🚩 Autonomía Indígena (art. 233)

Pero más importante aún, esta nueva Constitución Política del Estado plantea:

- 🚩 Salud pública universal y de calidad

- ✚ Educación gratuita
- ✚ Pensiones dignas
- ✚ Cuidado del agua
- ✚ Cuidado del medio ambiente
- ✚ Chile un Estado social y democrático de derecho
- ✚ Plurinacionalidad de los pueblos indígenas
- ✚ Prohíbe discriminación por nacionalidad

Este proyecto de nueva Constitución Política del Estado irá a plebiscito o referéndum el 4 de septiembre. Quedan 2 meses, ya que el 4 de julio los Constituyentes entregaron la nueva CPE a Boric, para hacer campaña. Allí se medirá la fuerza de este nuevo proyecto político en Chile.

3. Análisis comparado

Las teorías de la transición democrática que desarrolló Guillermo O'Donnell, entre otros, hacen más referencia a las transiciones de la dictadura a la democracia (O'Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe, 1985). Ese no es el caso, para el que nos estamos refiriendo, al hablar de transiciones EN democracia. Esa decir. De un período a otro, ambos democráticos. Con características en muchos casos, muy anómalas, poco usuales, inéditas, e incluso, judicialmente observables.

Aunque eso nos lleva a dos o tres digresiones: la de la consolidación democrática (O'Donnell, 1996) (Shedler, 1998), democracia delegativa (O'Donnell, ¿Democracia delegativa?, 1997), transiciones desde el autoritarismo a la democracia y desde la dictadura a la democracia, entendiendo que también puede haber autoritarismo en democracia (Gomez Leyton, 2010).

En todo caso, debemos intentar hacer el ejercicio en dos momentos históricos: cuando se inicia el giro a la izquierda, diferenciando la izquierda nacionalista, la izquierda indigenista y la izquierda populista. Un segundo momento será luego de que en varios países se inicia este proceso de giro a la izquierda en sus tres versiones, y en los que se ha recuperado el poder, en las mismas versiones.

Los actos electorales por sí solos tampoco constituyen un reflejo de democracia. De hecho, las máquinas electorales, como son el peronismo en Argentina o el MAS en Bolivia, impiden que se pueda desbrozar la paja de la semilla o del tallo. Varios estudios hoy, ya apuntan en esa dirección (Levitsky, Steven; Way, Lucan, 2004). Las teorías del autoritarismo competitivo apuntan en esa orientación y se deben tomar con la suficiente seriedad del caso.

Cabe todavía una digresión más; la de la democracia subnacional y la democracia en la relación entre pueblos indígenas y Estado/Nación, incluyendo la existencia o no de formas democráticas de autogobierno de los pueblos indígenas de América latina.

¿Hay transiciones entre estos tipos de autogobierno el momento en que cambia la orientación política de los gobiernos del Estado/Nación? ¿Afectan estas transiciones también a estas formas de autogobierno? (Mamani Ramírez, 2017).

Con todos estos antecedentes teóricos, se puede ingresar a tratar de diseccionar las transiciones que hemos vivido recientemente en los 4 países en los que estamos trabajando la comparación o el análisis comparado:

Tipos de Transición a gobierno de izquierda en países seleccionados

Paises	Tipo de izquierda	Gobierno(s)	Tipo de Transición a estos gobiernos
Ecuador	Izquierda populista/neopopulista	Correa/Moreno	Crisis de partidos+ Crisis democrática
Perú	Izquierda nacionalista	Ollanta Humala	Alianza democrática + Cambio Electoral
Bolivia	Izquierda indigenista neopopulista	Evo Morales	Crisis de partidos + Crisis democrática
Chile	Izquierda democrática	Lagos/Bachelet	Alianza democrática + Cambio Electoral

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro comparativo se ve, de dónde parte el giro a la izquierda y porqué ocurre este giro. Por una parte, está la presencia de crisis de partidos políticos tradicionales y crisis democrática, en los casos de Ecuador y Bolivia. En el caso ecuatoriano, inocuos los reformistas, saldrán de la misma estructura de partidos tradicionales. No nos olvidemos que Correa ha sido ministro de finanzas de un gobierno anterior. Se desprende para desde la crítica que había emprendido siendo ministro, señalar que la estructura de partidos en ese momento, no permitía hacer cambios que converjan a una posición más democrática. Ni siquiera socialista.

No nos olvidemos que en su gobierno va a tener enfrentamientos con los pueblos indígenas por temas como la educación superior (la universidad indígena Amawtay Wasi), con independencia académica, y relación solo con el CONAIE, que era la organización de pueblos indígenas del Ecuador (con activa participación del líder indígena Luis Macas); o su enfrentamiento con los *shwar*, de la Amazonia ecuatoriana por la exploración y explotación de petróleo en territorios indígenas, en franca posición extractivista y de orientación al mercado global, además en contra del principio del *Sumaj Kawsay* o Buen Vivir, al que él mismo se adhirió. Principio que pregona la armonía entre el hombre y la naturaleza.

La crisis democrática se da por el hecho de que, en ambos países, se había practicado, en Bolivia de manera más sistemática y en Ecuador con sobresaltos, la alternancia en el gobierno, de diferentes partidos y tendencias. Los gobiernos que precedieron a Correa en Ecuador como fueron Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988) y Sixto Durán Ballén (1992-1996), de raigambre neoliberal; fueron suplantados por gobiernos entre populistas como Abadía Bucaram (1996-1997); social demócratas como Fabián Alarcón (1997-1998), y Jamil Mahuad de centro (1998-2000), o de derecha como Gustavo Novoa (2000-2003), o de nacionalismo indigenista como el de Lucio Gutiérrez (2003-2005), para volver a la derecha con Alfredo Palacio (2005-2007). Todos gobiernos Bucaram hasta Palacio, con promedio de duración de 2 años. Una franca crisis democrática. No se concluían los mandatos, por juicios parlamentarios por corrupción, uso de influencias en función al cargo, nepotismo, etc. En contraposición Correa gobernará 10 años del 2007 al 2017 y Lenin Moreno su delfín y posterior detractor 4 años más del 2017-2021. Es claro que este giro a la izquierda representó una estabilización democrática, por encima de cualquier otro criterio. Se consolidó con una Constituyente que proclamó la "revolución ciudadana" y que provocó

la descentralización del país y un mayor peso del Estado en la economía.

En Bolivia sucede algo similar, ya que los gobiernos neoliberales que inauguran este ciclo son Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002) (a raíz del fallecimiento del presidente Banzer completa un año de gobierno), otra vez Gonzalo Sánchez de Lozada (2003-2004). Aquí empieza, con el denominado “octubre negro”, precedido del “febrero negro” y de la “guerra del agua” del año 2000 -dos momentos de revuelta popular-, una crisis política denominada en términos gramscianos “el empate catastrófico”, donde ninguno de los polos políticos de derecha e izquierda define su preeminencia y entretanto se deteriora la economía y se dispersa la sociedad. Vendrán dos gobiernos transitorios, el de Carlos mesa (2003-2005) y el de Rodríguez Veltzé (2005-2006), para que surja Evo Morales que gobernará 14 años (2006-2019). Pero fuera del último momento entre 2003-2006, donde existe una clara ruptura de la continuidad democrática, hay dos hechos diferentes a lo que sucedió en Ecuador: no hay alternancia ideológica en los gobiernos neoliberales, que además eran de amplia coalición partidaria, donde varios politólogos y sociólogos identificaban la fortaleza de la democracia boliviana, por haber alcanzado una supuesta madurez, para lograr gobernabilidad democrática en base a pactos, alianzas y una alternancia partidaria (Mayorga, 2001), mas no ideológica. Inclusive la continuidad democrática, es cuestionada o al menos puesta en duda, en más de una publicación o análisis politológico (Calderon, 2017). Por tanto, la transición surge por deterioro de un modelo del llamado “cuoteo” político entre partidos, falta de democracia interna de los mismos y falta de alternancia o movilidad ideológica en el poder. Se consolidó con una Constituyente que proclamó el “Estado Plurinacional” y que condujo a una descentralización del país y un mayor peso del Estado en la economía.

El caso peruano es muy particular, ya que una continuidad democrática post Fujimori (que vendría a ser el eje neoliberal), tiene una seguidilla de gobiernos democráticos que luego del interinato de Paniagua, se inicia con Alejandro Toledo de corte neoliberal (2001-2006), Alan García del APRA, socialdemócrata de profesión (2006-2011); para llegar a la primera incursión de un gobierno de izquierda nacionalista indigenista como fue el de Ollanta Humala. Su origen militar le da el tinte nacionalista con los antecedentes de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez en los años 70's del siglo anterior. Su alianza con sectores y organizaciones indígenas le da el color indigenista, aunque de un discurso muy tenue en esta materia. Entonces, estamos ante una transición democrático constitucional por vía electoral, sin ningún antecedente de revuelo popular ni de movilización social de grandes consecuencias. Los gobiernos previos tuvieron conflictos sociales (como el minero en el sur y centro del país o el cocalero en la zona amazónica), pero nada fuera de lo usual. Por su parte, Ollanta Humala no consolidó su régimen y duró un solo periodo. Prácticamente acabó a las apuradas y salvó de salir por vía de una renuncia o juicio político del Congreso, por sus manipulaciones políticas y negociaciones que terminaron repartiendo el poder entre los partidos con representación parlamentaria.

En Chile, no hubo giro a la izquierda en los términos clásicos de los demás países. La izquierda chilena democrática, representada por el partido Socialista, accedió al poder con Lagos primero y Bachelet después, por los cuoteos o negociaciones de la coalición, no por presión o clamor popular. La institucionalidad democrática, tan respetada en Chile, se mantuvo incólume en este caso. Por ello, no se puede hablar de un giro a la izquierda en el caso chileno. Sino más bien de continuidad democrática, en el momento en que sucedía este giro a la izquierda, y de un corte netamente institucionalizado.

Pero luego, vendrá un “giro a la derecha” o de una interrupción del giro a la izquierda, representado por gobiernos democráticos o interinatos, productos de condiciones de transición bastante movidas, llenas de interrogantes.

Tipos de transición de gobiernos de izquierda a interinatos o gobiernos de otro corte

Países	Tipo de gobierno de recambio	Gobierno(s)	Tipo de Transición desde gobiernos de izquierda
Ecuador	Derecha conservadora	Lasso	Corrupción + Elecciones
Perú	Derecha liberal	PPK/Vizcarra	Corrupción + Elecciones
Bolivia	Derecha democrática	Jeanine Añez	Fraude electoral (Golpe de Estado) + movilización ciudadana
Chile	Derecha conservadora	Piñera	Elecciones

Fuente: Elaboración propia

Las transiciones ocurridas después del primer giro a la izquierda, son más que interesantes desde una perspectiva de variaciones en los desenlaces de estas experiencias. Si bien el primer experimento, que es el de Venezuela, ha continuado por una vía de autoritarismo democrático, claramente sostenido en los poderes militares, policiales y parapoliciales; en los países en los que se imitó este camino, la experiencia fue más traumática. Ya hemos comentado anteriormente los casos de Paraguay con Lugo que, por un ascenso al poder en condiciones de compartir el poder con el centro, se vio socavado internamente. Algo similar señalamos que ocurrió en el segundo gobierno de Dilma Rousseff con el *lava jato*, donde, si bien el detonante son acciones poco transparentes, por decir lo menos, de parte de dirigentes del PT, para conseguir financiar su campaña, se verán envueltos en escándalos, juicios y cárcel, incluido el propio Lula. Pero la alianza con el centro también tendrá el mismo efecto de socavar su gobierno (el de Dilma) desde adentro. En ambos casos la acción parlamentaria fue clave para el “giro a la derecha”, previa sucesión constitucional. En Uruguay, en cambio, país que tiene la misma institucionalidad democrática que Chile, el cambio o transición proviene de la acción puramente electoral. Son los pocos resultados de cambio y la expectativa de apertura de mercados, lo que llevará a que se produzca la salida del Frente Amplio del gobierno. Estamos ante un cuestionamiento a la propia democracia, en el marco de cambios de signo ideológico (Calderon, 2017).

Pero, ya ingresando en los países que se encuentran en nuestro foco atención. El caso de Ecuador surgirá desde las entrañas del proceso de cambio, ya que Lenin Moreno se desmarcó de Correa, no por ambición personal ni por afán de reconducir el proceso, sino porque heredó condiciones de corrupción demasiado evidentes, que lo dejaron en *off side*, fuera de foco, lo que casi que lo obligó a desligarse de esa herencia correísta. El cambio a la derecha será solo ya una consecuencia de aquello. No habrá condiciones para que Correa sostenga su posición. Aunque electoralmente dio lucha a Lasso. Pero no tenía ya suficiente peso, ni tampoco se podría creer que lo podría incrementar, con su presencia, si pudiera volver a Ecuador, alejado por razones judiciales. Ese es otro tema que no consideró este conjunto de gobiernos de izquierda. La judicialización de la política, en sus gestiones, se volcó contra ellos, una vez que estuvieron fuera del gobierno. Esto veremos que es reutilizado, en el caso boliviano.

En el Perú la salida de Ollanta Humala no se sintió como que la izquierda hubiera salido del gobierno, sino que se producía una transición de alternancia de orientación política. En un ámbito donde el sistema de partidos está prácticamente destruido, la aparición de candidatos como Kuczynski, no es una sorpresa. Que, a su vez, éstos se comprometan en corrupción o arrastren la que conllevan por su pasado en gobiernos anteriores, tampoco será sorpresa. Eso mismo le pasó a Vizcarra. Por tanto, fue una dentro de los marcos de la política peruana. Con cierto respeto a la Constitución y a la continuidad democrática. En todo caso la siguiente transición será más traumática y ajena a esta última, en el caso peruano (Lopez Segrera, 2016).

En Bolivia, la salida de Morales, fue realmente sorpresiva, incluso para el propio Morales y ni qué decir, de García Linera, el ideólogo vicepresidente de Morales. El irrespeto al resultado del referéndum de febrero del 2016, que no autorizaba a una tercera re-postulación presidencial a Morales, el fallo del Tribunal Constitucional de 2017 y la proclamación de su partido el 2018, son pasos, que van generando suspicacia primero, desconfianza después y rechazo finalmente. Ante el menor vislumbramiento de acciones anómalas en el recuento de votos de las elecciones del 20 de octubre de 2019 (una auditoria de la OEA primero, anunciada el 10 de noviembre, señalando que hubo anomalías en el recuento de votos y de la UE después, confirmaron que hubo anomalías¹), la ciudadanía se pronunció, bloqueó calles, y en forma pacífica se opuso a que se consolidara este resultado electoral, que le daba a Morales más de 40% de votos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo que era Mesa, evitando una segunda vuelta electoral. Reuniones entre dirigentes políticos, acuerdos, renunciias de Morales y García Linera primero y de la@s sucesores constitucionales en senadores y diputados, hasta llegar a la segunda vicepresidente de la cámara de senadores, de oposición, la sra. Jeanine Añez, llevaron a que, simultáneamente al pronunciamiento de la COB, que pidió que renuncie Morales, de los comandantes de las FFAA y una revuelta policial; conduzcan a una transición que duró 20 días, desde el 20 de octubre hasta el 10 de noviembre en que renuncia Morales. Morales sale exilado a México y luego a Argentina. Y a los pocos meses denuncia que hubo golpe de Estado, por la acción de pronunciamiento de los militares, que fue casi fuera del tiempo en que resolvió el conflicto, y sin ninguna acción de fuerza. Denunció que la asunción de Añez fue inconstitucional, cuando la misma respondió a acuerdos interpartidarios con presencia de representantes de NNUU y la Iglesia católica. En todo caso, esto ha hecho que nuevamente se judicialice la política, se encause a Añez, se la encarcele por 10 meses en prisión preventiva, sin sentencia, y se la sentencie finalmente por haber asumido la Presidencia fuera de la Constitución, por 10 diez años. Entremedio, en los hechos de esos 20 días, murieron resistentes del MAS en Senkata-El Alto, y en Sacaba, además de opositores en Montero y las minas. Esto será objeto de otro juicio contra Añez y comandantes militares y policiales. Nuevamente, más judicialización de la política. Esta transición es altamente asincrónica. Tiene valoraciones de mucho tinte. Desde quienes consideran que Morales huye y traiciona el proceso de cambio (Cortez, 2022), hasta quienes creen que lo dejaron solo (Moldiz, 2020). Desde quienes consideran que la derecha no aprovechó la oportunidad para enjuiciar a los dirigentes del MAS por corrupción y otros hechos poco transparentes (Ayo, 2020), hasta los que consideran que la derecha se corrompió mas rápido aprovechando la pandemia, en un entorno de capital corrosivo que facilita este escenario (Oporto,

¹ Hubo retuque del CEPR, de un investigador de la Universidad Complutense de Madrid y de un centro de investigación de la Universidad de Michigan, del CELAG y del MIT, que contradijeron la auditoria de la OEA. La OEA a su vez, se ratificó el 2020 en su auditoría y denunció hechos poco transparentes en los estudios de las entidades precitadas.

2020). Una transición de un año de Añez, que solo creo condiciones para el retorno al poder, del mismo partido de Morales, que intento candidatear, pero que el Tribunal Constitucional esta vez no se lo permitió. No fue un retorno a un proyecto oligárquico, como erradamente interpretaron varios analistas (Mayorga, Fernando (coordinador); et.al., 2020).

Finalmente, en Chile, se ratifica el institucionalismo democrático y la derecha conservadora con Piñera a la cabeza, retoma el poder, con un pretendido discurso alejado del pinochetismo, pero que poco a poco se irá develando como de retorno a esa ansiada economía de mercado libre, con el menor Estado posible. La teoría del derrame y los jugosos créditos bancarios a los oligarcas chilenos, permitirán cerrar la brecha de empleo por un tiempo, pero luego se reflejarán las grandes disparidades especialmente sociales, como el tema de la educación superior (Lopez Segrera, 2016).

Tipos de transición de retorno de gobiernos de izquierda

Países	Tipo de izquierda	Gobierno(s)	Tipo de Transición de retorno a gobiernos de izquierda
Ecuador	Derecha conservadora	Lasso	Corrupción + Elecciones
Perú	Izquierda nacionalista	Pedro Castillo	Alianza democrática + Cambio Electoral
Bolivia	Izquierda indigenista neopopulista	Luis Arce	Crisis de partidos + Crisis democrática
Chile	Izquierda indigenista neopopulista	Boric	Crisis de partidos + Elecciones

Fuente: Elaboración propia

La segunda ola o viraje a la izquierda, que tiene entre sus más recientes expositores a Gustavo Petro en Colombia y a Gabriel Boric en Chile, en los países que estamos analizando ha tenido características propias.

En Ecuador ese retorno de la izquierda no se ha producido, aunque se debe reconocer que, en las últimas elecciones, el frente correísta ganó en primera vuelta. El 20 de marzo de 2021, el Pleno del CNE proclamó los resultados definitivos de la primera vuelta electoral llevada a cabo el 7 de febrero, para presidente y vicepresidente de la república, los cuales dieron al binomio de Unes (Arauz-Rabascall) el 32,72% de los votos (3'033.791) y la alianza CREO 21 - PSC 6 (Lasso-Borrero) el 19,74% (1'830.172). En la segunda vuelta, una vez que el CNE finalizó con el 100% del escrutinio de las actas, el 18 de abril de 2021 se instaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios de la segunda vuelta electoral donde se verificó que no existieron reclamaciones, por lo que se anunció oficialmente la victoria de Guillermo Lasso con el 52,36% (4.656.426 votos). Por su parte el candidato Andrés Arauz obtuvo el 47,64% (4.236.515 votos). De esa manera, el candidato de CREO ganó la elección con una diferencia de 4,72% en relación a Andrés Arauz. Esta es una diferencia muy pequeña, donde Lasso logró agrupar a todos los anticorreístas, como mecanismo de derrota a esta corriente política.

En Perú también hubo segunda vuelta, para el ascenso de Pedro Castillo. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con las actas de votación procesadas al 100%, en las elecciones del 11 de abril de 2021, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, logró el 19,099% de los votos, seguido de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (13,368%); Rafael López Aliaga, de

Renovación Popular (11,699%); y Hernando de Soto, de Avanza País (11,593%). En las elecciones de segunda vuelta el 6 de junio de 2021, el candidato de izquierda Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de los votos, mientras que su rival, Keiko Fujimori, de derecha, recibió el 49,875%, de acuerdo a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Aquí es Castillo el que concentra la votación antifujimorista, del cual muchos tienen aún malos recuerdos. Aun así, la diferencia es aún más pequeña que en Ecuador.

Ahora bien, el caso de Bolivia es diferente. Arce ganó en primera vuelta frente a dos opositores que se dividieron el voto y que mostraron diferencias públicas aprovechadas por el MAS. Las elecciones de 18 de octubre de 2020 (363 días desde la crisis del 2019) los resultados de las elecciones de Bolivia le dieron a Carlos Mesa obtuvo 28,8% (centro), Camacho 14% (derecha) y Arce el 55% de los votos a favor. Aquí el discurso del golpe de Estado, la mala gestión de Añez, la postulación y retiro de postulación de Añez, la indecisión de partidos como UN y Doria Medina, La corrupción del gobierno de Añez, además del voto “duro” indígena y campesino cocalero del MAS, influyeron en este resultado, además de una labor no realizada de saneamiento del registro electoral.

Siempre se dijo que el MAS era una maquinaria electoral antes que partido político. Este dominio del socialismo boliviano alcanzó su cota máxima en las elecciones de 2009, cuando Evo Morales logró el 64,2 % de los votos, con una diferencia de casi 38 puntos sobre Manfred Reyes (26,4 %). En 2014 apenas se resintió y Morales volvió a cosechar un triunfo absoluto al sacar en primera vuelta el 61,3 % de los votos, con 37 puntos por encima de Samuel Doria Medina (24,2 %). Inclusive en la elección fraudulenta del 2019, en aquella polémica cita electoral, Morales fue elegido para un cuarto mandato consecutivo con un 47,08% de los votos, el porcentaje más bajo obtenido por el expresidente en las cuatro elecciones donde había resultado ganador. Con ese porcentaje, revalidaba igualmente su mandato gracias a que sacaba más de 10 puntos de ventaja a Mesa (36,51 %), pero enseguida surgieron denuncias de fraude, ya que durante casi todo el escrutinio parecía que Mesa tenía el margen suficiente como para garantizarse una segunda vuelta. Con más de la mitad de los votos, un candidato se convierte automáticamente en presidente electo de Bolivia en primera vuelta, algo que también se hubiese producido si obtenía el 40 % de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.

En el caso chileno, en primera vuelta Boric sacó 25%, Kast 28%, Parisi y Sichel (independiente) 12,8%, Provoste 11 y Ominami 7%. En la segunda vuelta Boric sumó el 55,87% por el 44,13% de Kast, y fue el ganador en el 21 de noviembre de 2021. Aquí también hubo segunda vuelta. Y Boric logró captar votos de los independientes y de Ominami, que es un claro dirigente independiente de izquierda, con lo que le alcanzó para superar a un candidato muy de ultraderecha. La derecha chilena también se dividió y eso contribuyó al triunfo. Además, en la segunda vuelta hubo más de un millón adicional de nuevos electores, que se supone por encuestas, se volcaron en favor de Boric. Esto muestra una dinámica electoral nueva en Chile. Primera vez que el candidato que sale segundo en la primera vuelta, remonta en la segunda vuelta. Primera vez que se tiene un candidato tan joven (34 años) y primera vez que la izquierda no incluye a la social democracia (el Partido Socialista) en su alianza. Son hechos novedosos que denotarán un cambio. Lo mismo, la participación de indígenas, jóvenes y mujeres en las movilizaciones del ganador, fueron preeminentes.

4. Conclusiones

Las transiciones de derecha a izquierda, tuvieron una fuerte influencia de la experiencia chavista de Venezuela. Ecuador, Bolivia y luego Perú verán este hecho. No hablamos de experiencias que vienen de acumulación política y electoral de partidos que tienen larga participación electoral democrática, como el peronismo en la Argentina como experiencia populista, y el PT de Lula en Brasil de orientación socialista. Además, estos dos últimos están fuera de este análisis comparado. Todas las experiencias analizadas contaron con el desgaste del sistema de partidos, del desgaste del neoliberalismo y del desgaste de la democracia representativa. Por ello, fueron precedidas de acciones directas de masa en varios de los casos.

Las transiciones de izquierda a derecha fueron más fruto de hechos de corrupción, de desgaste político interno y democrático de los partidos en función de gobierno, y de falta de un reemplazo o un exceso de caudillismo, del que no se zafaron. Fueron más resultado de factores propios de los partidos de izquierda que de virtudes de sus reemplazantes de derecha. Que por otra parte no duraron mucho (Bolivia un año, Perú 4 años). Por tanto, se debe notar que no tenían un *alter ego* contrario con proyecto de poder de largo plazo, sino solo como una oposición al acecho para provocar el derrumbe.

Las segundas transiciones de la derecha a la izquierda fueron más bien democráticas, aunque con tropiezos electorales (segundas vueltas en 3 de los 4 países analizados), y basados en estrategias muy endebles como las del golpe/fraude en Bolivia, que en el tiempo se pueden/deben caer. Incluso las nuevas experiencias como la chilena, tuvieron esa característica.

¿Ahora bien, se puede hablar de un retorno a un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda en América latina, y en específico en los 4 países que estamos analizando? Hay autores que consideran que ya la teoría del ciclo político no es útil. Que lo que se viven son transiciones que responden a impulsos socio-económicos o ideológico-culturales. ¿Podemos seguir con este análisis de transiciones en este escenario y en medio de estos cuestionamientos? (Canelas, 2022).

Por otro lado, estos retornos de gobiernos de izquierda, insisten en impugnar el retorno a gobiernos neoliberales. No es una impugnación a la democracia ni a gobiernos de centro izquierda. Aunque estos sean cuestionados, como es el caso de Chile. Pero no lo es en Colombia donde será una impugnación a la derecha conservadora, al neoliberalismo. Se podría decir que en Bolivia es similar, esta impugnación a la derecha neoliberal, igual que en Perú, son la consecuencia de esta repugnancia de los votantes a volver a un sistema neoliberal. Ese asco lo perdieron los ecuatorianos. Pero en Bolivia y Perú y ahora recientemente en Colombia parece ser la causa principal. Así como nuestros países se han vuelto adversos a las hiperinflaciones, se han convertido en reacios al neoliberalismo y consideran que necesitan de la protección del Estado por la vía de la intervención de este, al menos en políticas sociales y moderadamente en las económicas (Ouviaña, Hernán; Thwaites Rey, Mabel. (compiladores), 2018).

Tampoco es un tema que se pueda resolver en el ámbito puramente formal, puramente electoral. Los discursos y los programas contrastados con la gestión pública y los resultados, muestran que los giros a la izquierda han sido mucho de discurso y poco de transformación de fondo. Mas cambio simbólico que estructural. Los discursos y programas debieran volver a ser lo que eran para la izquierda, el conducto ideológico, que debiera servir de hoja de ruta, para que se cumplan los ideales y las premisas de estas transformaciones (Caballero Carrizosa, Esteban, 2022). Si no se vuelve a un tipo de *gatopardismo* poco eficaz, menos eficiente y nada efectivo.

Pareciera ser que los tipos de transición que se han vivido últimamente en América latina debilitan y no fortalecen la democracia. Y no solo la democracia representativa, sino también la democracia participativa, donde las experiencias de calle, como las de Bolivia, son ignoradas por los partidos. Los partidos no se consolidan como partidos como en Bolivia, Perú y Chile. La democracia participativa ignora instrumentos propios como el referéndum como en Bolivia. En fin, la democracia se encuentra en entredicho, es lo menos que podemos concluir.

Bibliografía

- Ayo, D. (22 de febrero de 2020). *La corrupción en el gobierno de Evo Morales. Un modelo de cartel*. Obtenido de <https://es-es.facebook.com/Diego-Ayo-Saucedo-669798696552207/videos/la-corrupci%C3%B3n-en-bolivia-durante-evo-morales-un-modelo-de-c%C3%A1rtel/789237691586244/>
- Caballero Carrizosa, Esteban. (2022). La matriz política sudamericana y los desafíos para una alternativa progresista. *Latinoamerica 21*, s/n.
- Calderon, F. (. (2017). *Los Límites de la Democracia 2 Tomos*. Buenos Aires: CLACSO.
- Canelas, M. (2022). America latina: no todo lo que brilla es ciclo. *Nueva Sociedad*, No.299.
- Cortez, R. (2022). *Del auge a la descomposicion de un proceso de cambio. Bolivia 2013-2021*. La paz: CEP/PPM, Plural editores.
- Gomez Leyton, J. c. (2010). Democracia versus Autoritarismo en la política latinoamericana: un viejo dilema político muy actual. *Demo-Auto*, s/n.
- Levistky, Steven; Way, Lucan. (2004). Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo. *Estudios Poíticos. Medellín*, 159-178.
- Lopez Segreña, F. (2016). *Crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha*. Buenos Aires: CICCUS, CLACSO.
- Mamani Ramírez, p. (2017). "Estado Plurinacional" autoritario del siglo XXI. *Religación*, 68-96.
- Mayorga, Fernando (coordinador); et.al. (2020). *Crisis y cambio político en Bolivia*. Cochabamba: CESU-Oxfam.
- Mayorga, R. A. (2001). Presidencialismo parlamentarizado y coaliciones políticas en Bolivia. En J. L. (compilador), *Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en America Latina* (págs. 101-135). BUENOS AIRES: CLACSO.
- Moldiz, H. (2020). *Golpe de Estado en Bolivia. La soledad de Evo Morales*. La Habana: Ocean.
- O'Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe. (1985). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Buenos Aires: Paidós.
- O'Donnell, G. (1996). Ilusiones sobre la copnsolidación democrática. *Journal of Democracy. John Hopkins University*, s/n.

- O'Donnell, G. (1997). ¿Democracia delegativa? En G. O'Donnell, *Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democracia* (págs. 287-304). Buenos Aires: Paidós.
- Oporto, H. (2020). *El capital corrosivo en Bolivia y los retos de la Buena Gobernanza*. La Paz: Fundación Milenio.
- Ouviña, Hernán; Thwaites Rey, Mabel. (compiladores). (2018). *Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América latina*. Buenos Aires: Ed. Desde Abajo, Zur, CLACSO, Quimantú, El Colectivo, IEALC, TNI.
- Shedler, A. (1998). What is Democratic consolidation? *Journal of Democracy*, 97-101.